



NO ESTAMOS CONDENADOS A LA GUERRA

Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN

David Aponte, Andrés R. Vargas
Editores

COLECCIÓN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO

NO ESTAMOS CONDENADOS A LA GUERRA
Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN

NO ESTAMOS CONDENADOS A LA GUERRA

Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN

Andrés R. Vargas
David Aponte
Santiago Millán
Nicolás Chamat
Emilia Frost
Jorge A. Restrepo



NO ESTAMOS CONDENADOS A LA GUERRA

Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN

- © Odecofi-Cinep
Carrera 5ª No. 33B – 02
PBX (57-1) 2456181 • (57-1) 3230715
Bogotá D.C., Colombia
www.cinep.org.co
www.odecofi.org.co

- © Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac
Calle 55 No. 5-22
PBX (57-1) 2170200, Fax (57-1) 2170200 Ext. 210
Bogotá D.C., Colombia
www.cerac.org.co

- © Andrés R. Vargas, andres.vargas@cerac.org.co
David Aponte, david.aponte.castro@gmail.com
Santiago Millán, santiago.millan@cerac.org.co
Nicolás Chamat, nicolas.chamat@cerac.org.co
Emilia Frost, emilia.frost@cerac.org.co
Jorge A. Restrepo, jorge.restrepo@cerac.org.co

Las investigaciones incluidas en esta publicación han sido realizadas con la colaboración financiera de Colciencias, entidad pública cuyo objetivo es impulsar el desarrollo científico, tecnológico e innovador de Colombia

Editor General Colección Odecofi: Fernán E. González G.
Coordinación editorial: Helena Gardeazábal Garzón
Corrección de estilo: Álvaro Delgado Guzmán
Diseño y diagramación: Alberto Sosa
Impresión: Editorial Códice Ltda.

Primera edición
ISBN: 978-958-644-151-3
Agosto de 2011
Bogotá D.C., Colombia

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Capítulo 2

Variaciones regionales de la presencia del ELN

Por Santiago Millán

Como se dijo en el primer capítulo de este libro, en algunos departamentos del país el ELN es una fuerza regional. Como fuerza insurgente nacional, transita hacia un declive estratégico; no obstante, su capacidad de incidir militar y políticamente en las dinámicas regionales de algunos departamentos lo convierten en un actor sobresaliente, con capacidad de daño y de intermediación política y social.

Como la guerra, la violencia y la presencia y operación violenta del ELN varían a través del espacio, es pertinente adelantar estudios regionales que den cuenta de estas variaciones. En este capítulo se presentan tres análisis que tienen como objeto de estudio Arauca, Nariño y Norte de Santander –en este último caso con énfasis en el Catatumbo–. La selección de las regiones a ser estudiadas se hizo teniendo en cuenta la relevancia histórica que ellas tienen para el ELN, así como la evidencia de que en estos departamentos mantienen sus estructuras más activas y por lo tanto su capacidad de producir violencia.

El presente capítulo se sitúa en una perspectiva de análisis de la actual dinámica de la violencia del conflicto armado y no en una perspectiva histórica. Es importante establecerlo, pues si bien los análisis regionales que componen este capítulo tienen en cuenta aspectos históricos de la configuración de la guerra en cada región, éste no es su énfasis; por el contrario, tal acento reside en describir y comprender la dinámica actual de la violencia del ELN en los tres departamentos seleccionados.

El objetivo de estos análisis es establecer cuáles son las particularidades de la presencia del ELN en la región y cuáles las implicaciones

que ofrecen esas particularidades para obstaculizar o posibilitar la terminación de la confrontación armada del Estado con esa guerrilla. Con el ánimo de responder a estas preguntas, para cada uno de los análisis regionales se tiene en cuenta la operación violenta del ELN y su comportamiento en relación con el conflicto armado, así como la capacidad de daño sobre la población civil, es decir, la victimización provocada por el grupo armado. Otro aspecto a desarrollar es la identificación de posibilidades y obstáculos de cada región para la terminación del conflicto con el ELN.

Identificar estos aspectos destacando las particularidades permite desarrollar un ejercicio comparativo del papel del ELN en cada una de las regiones. De este ejercicio se destacan algunos hallazgos importantes. Puede observarse que las relaciones del ELN con otros grupos armados son diversas y transitan entre la cooperación, la confrontación y la subordinación hacia otros grupos armados. También se destaca que en regiones como Arauca y Norte de Santander, mientras el ELN pueda cumplir funciones de intermediación armada en la relación con los pobladores y el Estado y en la tramitación de los conflictos sociales, siempre tendrá una ventana de oportunidad para perdurar en el tiempo.

Como fenómeno reciente, es importante mencionar que en las regiones analizadas la inserción del ELN en la economía cocalera puede constituirse en un tránsito de una insurgencia armada, que produce violencia asociada a la maximización del control territorial insurgente con el objetivo de lograr un cambio del régimen político, a una insurgencia que produce violencia asociada principalmente a las disputas por las rentas de la economía cocalera. Esto es particularmente visible en ciertas zonas de Nariño, donde algunos frentes del ELN se han asociado con grupos mayormente vinculados con todos los eslabones de la cadena productiva de la economía cocalera, como son los neoparamilitares.

Los dos grandes rasgos mencionados –intermediación social y política en Arauca y Norte de Santander y vinculación y alianzas con agentes relacionados con la económica cocalera– marcan la diferencia entre el ELN del suroccidente y el del nororiente. De igual manera, tales rasgos regionales distintivos constituyen en algunos casos obstáculos y en otras ventajas para la finalización del enfrentamiento armado con el ELN.

El presente capítulo se divide en tres secciones. La primera realiza un análisis del departamento de Nariño, donde se destaca la economía cocalera como el eje central y aglutinador de la disputa armada, y hace

énfasis en la última década. En la segunda parte, que abarca el departamento de Arauca, se plantea que las disputas por la hegemonía política, tanto electoral como de regulación sobre la población, sirven como catalizador de la producción de violencia en la región. Finalmente, la tercera parte hace el examen de Norte de Santander, donde se argumenta que el ELN, producto de la superioridad logística y operativa de otros grupos armados, atraviesa por un debilitamiento relativo y, en consecuencia, está subordinado militarmente a las Farc.

Nariño: economía cocalera y el ELN

De escenario de refugio a escenario de disputa

Durante las décadas inmediatamente anteriores al nuevo milenio, el departamento de Nariño no hacía parte central de la dinámica de la guerra. Si bien desde principios de los ochenta hay allí presencia de insurgencia armada, primero del ELN y posteriormente de las Farc, la región era solo un escenario de refugio. En parte eso obedeció a las particularidades geográficas del departamento y a la presencia diferenciada del Estado, que incluye tardíamente a esta región caracterizada por la pobreza de sus habitantes, la falta de integración de su población y una economía departamental con un desarrollo precario, caracterizado por la producción de bienes primarios y un desarrollo industrial muy incipiente (Vicepresidencia de la República, 2002: 3).

El ELN presente en Nariño tiene entre sus rasgos distintivos el trabajo político y social adelantado con algunos grupos sociales, sindicales e indígenas, que capitalizaba la exigua presencia estatal y las precarias condiciones socioeconómicas de una población étnicamente diversa que encontró en el discurso ‘eleno’ un espacio posible para sus reivindicaciones sociales. Esta situación es descrita así por Benhur Solarte: “Se agrega su injerencia en la organización de la comunidad, reemplazando al Estado para realizar obras materiales de beneficio colectivo y la solución de conflictos familiares, laborales y de limpieza social contra la delincuencia común y el abigeato” (2003: 281).

El ELN hace presencia en la región como parte de los procesos de expansión del movimiento guerrillero durante los años ochenta. El Frente de Guerra Suroccidental procuró insertarse –con variados niveles de éxito– en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila y el sur del Chocó.

Tal expansión se apoyó tangencialmente en el usufructo de la economía petrolera y la extracción aurífera, representadas respectivamente por el Oleoducto Trasandino entre Putumayo y Nariño y los yacimientos de oro existentes en este último departamento.

Sobre el Frente de Guerra Suroccidental es pertinente mencionar que “tuvo un alto componente de estructuras (frentes y núcleos) que funcionaban a nivel urbano, constituido por complejas redes que sirven de apoyo logístico y que facilitaron la comisión de extorsiones y secuestros en muy variados sectores de Cali, Popayán, Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Pasto y otros centros urbanos” (Espejo y Garzón, 2005: 9). La presencia urbana del ELN se materializó en Nariño por conducto de la comisión regional urbana “Omaira Montoya Henao”, que para 1988 había establecido una presencia considerable en Pasto, extendida a las zonas rurales en 1992 con la creación del Frente “Comuneros del Sur”. “Para comienzos de la década del 90, el ELN controlaba las áreas aledañas al oleoducto trasandino y el Frente Comuneros del Sur hacía presencia activa en la vía a Tumaco, Barbacoas, la frontera y regiones de todo el altiplano sur” (Solarte, 2003: 281).

En la actualidad el ELN opera en Nariño con los frentes Comuneros del Sur, Héroes y Mártires de Barbacoas, Manuel Vásquez Castaño y Guerreros de Sindagua y las compañías Jaime Toño Obando, Camilo Cienfuegos y José Luis Cabrera. Como se observa en el Mapa 1 del capítulo anterior “Dispositivo militar del ELN, 2007-2008” (p. 70), la mayoría de las estructuras mencionadas tiene su área de operación en la zona cordillerana, a excepción de los frentes Héroes y Mártires de Barbacoas y Guerreros de Sindagua, que funcionan en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Magüí Payan y Los Andes, es decir, en el Andén Pacífico del departamento, y el Frente Manuel Vásquez Castaño, que aparece en el municipio costero Francisco Pizarro.

En lo que se refiere a las Farc, su ingreso a Nariño se remonta a mediados de los años ochenta, pero solo en la primera mitad de los noventa el departamento empieza a tomar relevancia estratégica para esta guerrilla. En ese momento desarrolla acciones importantes contra las fuerzas estatales, la infraestructura eléctrica y el Oleoducto Trasandino (Bd-cac-Cerac, V. 11.). Las Farc actúan en Nariño por medio del Comando Conjunto de Occidente, que extiende sus acciones a los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. En Nariño el Comando Conjunto de Occidente cuenta con los frentes 2, 29 y 64, además de algunas compañías y columnas móviles. La información de que dispone la Corporación

Nuevo Arco Iris (Cnai) establece que el Frente 2 se encuentra activo y opera en los siguientes municipios: Consacá, Contadero, Córdoba, Funes, Guaitarilla, Iles, Ipiales, Ospina, Potosí, Puerres, Pupiales, Tangua y Yacuanquer (*Semana*, 2008, 6 de junio).

La misma fuente señala que el Frente 29 actúa en los municipios de Barboacas, Tumaco y Santa Bárbara y, a diferencia del anterior, lo caracteriza como diezmado¹. Finalmente, la Cnai indica que el Frente 64, que está diezmado al igual que el 29, opera en los municipios de Arboleda, Belén, Chachagüí, Colón, El Rosario, El Tablón, El Tambo, La Cruz, La Unión, Policarpa, San Pedro y San Pedro de Cartago (*Semana*, 2008, 6 de junio).

Como se observa en el Gráfico 1, los eventos de conflicto registrados en el período 1988-1999 son escasos; en la mayoría de casos se trata de acciones unilaterales perpetradas por las guerrillas, como secuestros, extorsiones y atentados al Oleoducto Transandino (Bdcac-Cerac, V. 11), al contrario de lo que sucede en Arauca o Norte de Santander, donde, como se observará más adelante, se observan niveles significativos de actividad violenta desde el inicio de la serie.

Lo anterior indica que, con antelación a 1999, Nariño era un territorio de refugio de las guerrillas y que solo a partir de ese año empieza a cobrar valor estratégico para los grupos armados no estatales y estatales, es decir, se convierte en un escenario de disputa. Tal tránsito fue producto de dos procesos: la configuración de un *cluster de economía cocalera* en la región, principalmente en el Andén Pacífico, región comprendida desde el piedemonte de la Cordillera Occidental hasta la Costa Pacífica, y la incorporación militar de la región a la ofensiva estatal y a la estrategia de las guerrillas, principalmente las Farc.

La región empieza a convertirse en una zona central para el desarrollo de la economía cocalera, a causa de dos factores. El primero hace alusión a la puesta en marcha del Plan Colombia en el Bajo y el Medio Putumayo. En estas regiones el Estado llevó a cabo acciones contra los grupos insurgentes armados, principalmente contra las Farc, y fumigaciones a las aéreas de cultivos de uso ilícito. Esto provocó un traslado de los cultivos del Putumayo a Nariño, así como una migración a la región de la mano de obra con experiencia en cultivos ilegales (Vargas, 2003: 145).

¹ El criterio que utiliza Cnai para definir un frente como diezmado es que tenga entre 30 y 60 combatientes, y no los 150 que en teoría deberían componer un frente de las Farc.

Ahora bien, un segundo factor que contribuye a la incursión del narcotráfico en el departamento lo constituyen sus condiciones geográficas. Los parajes que antes servían de refugio para las guerrillas, ahora, a partir del traslado masivo de cultivos de uso ilícito y de la configuración de un clúster de narcotráfico en el departamento, contribuyen al desarrollo de la economía cocalera. La geografía del territorio, en particular la subregión del piedemonte costero y la llanura pacífica y sus esteros, brindan las condiciones para que se establezca y aglomere en ese territorio toda la cadena de la economía del narcotráfico. El aprovechamiento de las zonas selváticas del Pacífico para la ubicación de cultivos de uso ilícito, el aprovechamiento de los ríos Patía y Mira para el transporte de narcóticos –con su respectiva desembocadura hacia la ruta del Pacífico– y el difícil acceso a estas zonas por la escasez de vías, hacen de este departamento un “entorno generoso” para viabilizar la configuración de un clúster.

Hay que anotar que los grupos armados que tenían reducida presencia en Nariño, en particular los paramilitares, comienzan a copar y disputar el territorio en procura de las rentas derivadas del negocio del narcotráfico. No así las guerrillas, que ya estaban presentes en estos territorios y cumplían un papel de regulación económica del primer eslabón de la cadena de la economía cocalera: los cultivos ilícitos.

El segundo proceso que provoca el tránsito de la región a un escenario de disputa lo constituye la integración militar del departamento a la lógica y la dinámica de la guerra. El proceso de integración militar tiene lugar por la importancia estratégica que cobra la región para las Farc y el Estado durante el período de reacomodamiento (Granada, Restrepo y Vargas, 2009). Como consecuencia de la política de Seguridad Democrática, que privilegió la ofensiva contra los bloques y frentes de las Farc que operan sobre la Cordillera Oriental, esta guerrilla decidió trasladar su centro de despliegue estratégico a la Cordillera Occidental. El cambio condujo a un aumento de las acciones de las estructuras ligadas al Comando Conjunto de Occidente, que opera, entre otros departamentos², en el de Nariño. De igual manera, al comprender que la dinámica de la guerra se desplazaba a esta región, las fuerzas estatales incrementaron sus acciones desde el año 2000, como se observa en el Gráfico 3.

De acuerdo con lo anterior, y siguiendo a Vargas y Vásquez, la trayectoria territorial de la guerra de Nariño hace parte de lo que ellos

² Los otros departamentos en los que actúa el Comando Conjunto de Occidente son Chocó, el Valle del Cauca y Cauca.

denominan una subregión integrada militarmente a la guerra. Tal denominación integra una tipología desarrollada por estos autores para dar cuenta de la configuración y el desarrollo de la guerra en diversas subregiones de la macrorregión sur. En su investigación ellos plantean tres tipos de trayectorias territoriales: subregiones estructuradas por la guerra, subregiones asimiladas a la guerra y subregiones integradas militarmente a la guerra. Como ya se dijo, Nariño, dados los procesos mencionados arriba, presenta las características exigidas para constituir una región militarmente integrada a la guerra. Las regiones integradas militarmente, señalan estos autores, “se caracterizan por la prevalencia de las lógicas militares, lo que significa que las dinámicas de la guerra que se observan en ellas están frecuentemente vinculadas al centro y obedecen a cálculos estratégicos, sean insurgentes o contrainsurgentes”³ (Vargas y Vásquez, 2011: 362).

En este contexto de tránsito de un escenario de refugio a uno de integración militar es donde se desarrolla la dinámica actual del conflicto en el departamento, en particular en las zonas del Andén Pacífico y el piedemonte occidental. La importancia estratégica que adquirió para el desarrollo de la economía cocalera y las disputas entre los grupos armados por dominar y consolidar su poder en esta región geoestratégica⁴ son las claves para entender las particularidades de la guerra y el papel del ELN en esta coyuntura. Teniendo en cuenta lo anterior, se hará énfasis

³ Según la configuración y el desarrollo de la guerra, los otros dos tipos de trayectorias territoriales que plantean los autores son: i) Las subregiones estructuradas por la guerra, que “se caracterizan por el hecho que en ellas emergió la guerra y además lo hizo de manera simultánea con los procesos de poblamiento y configuración como subregión. Así, estos territorios están cruzados en su estructura social, económica y política por las lógicas de la guerra” (Vargas y Vásquez, 2011: 356); ii) Las subregiones asimiladas a la guerra, que “tienden a ser aquellas donde los procesos de poblamiento son antiguos o por lo menos de mediana duración al momento en que se empiezan a desarrollar las dinámicas de la guerra en su territorio. Así mismo, son subregiones donde el proceso de sedimentación social está relativamente avanzado en el momento en que la subregión se asimila al conflicto. De esta forma, un elemento fundamental en la trayectoria de estas subregiones es que los procesos de configuración social, política y económica de estos territorios son independientes respecto a las dinámicas de la guerra en tanto son previos a ella” (Vargas y Vásquez, 2011: 359).

⁴ Nariño es una zona fronteriza con Ecuador, que tiene salida al mar, con grandes extensiones de selvas y montañas escarpadas y que cuenta con entrada a la Bota Caucaña y al Macizo Colombiano. Dispone de accesos directos hacia el alto y el bajo Putumayo. Así mismo, la parte sur del territorio nariñense está atravesada por el Oleoducto Trasandino, que parte de Orito y llega a Tumaco. Fuera de la reconocida producción de oro y plata, representan un potencial en el área los recursos de petróleo, gas, roca fosfórica, cobre, molibdeno, plomo, zinc, manganeso, arcillas, arenas, piedra, gravas y gravillas. La actividad comercial es muy importante debido al intercambio con Ecuador, que favorece el contrabando y el tráfico de armas y drogas (Vicepresidencia, 2002: 4).

sis en el período en el que Nariño es integrado a la guerra por cuenta de los procesos descritos arriba, es decir, el que va de 1999 a junio de 2010.

La económica cocalera como rasgo relevante en la producción de violencia

El propósito de esta sección es indagar de qué manera este contexto ha incidido en la orientación de la guerra y en las dinámicas del ELN. Del análisis general del entronque entre la violencia y el conflicto queremos destacar tres características generales, que se irán desarrollando paulatinamente. La primera es que la inserción de Nariño en la guerra es resultado colateral de la ofensiva estatal contra el narcotráfico y la insurgencia puesta en marcha en otras regiones. La segunda estima que la configuración de un clúster de economía cocalera es el fenómeno aglutinador y generador de la confrontación de los grupos armados y, por lo tanto, un determinante importante del dinamismo de la guerra. Finalmente, se destaca la creciente victimización de civiles, en particular de comunidades específicas, como los indígenas y los afrodescendientes.

La configuración como un clúster del narcotráfico de algunas regiones del departamento –como ocurre con la llanura pacífica y el piedemonte occidental– representa un cambio cualitativo de esta economía, pues quiere decir que en el departamento existen zonas con una concentración de grupos y sectores relacionados entre sí por la economía cocalera. Eso exige un cierto grado de coordinación de todas las actividades ilegales: la siembra de la hoja de coca, el proceso de producción, la construcción de laboratorios, el transporte de narcóticos, el fomento de redes para el lavado de activos y la existencia o promoción de grupos armados que “faciliten el cumplimiento de los acuerdos, impongan barreras de entrada a potenciales competidores, protejan la propiedad ilegal y enfrenten a las autoridades” (Thoumi, 1996: 135). El aumento sostenido en los indicadores de violencia y victimización asociados al conflicto a partir de 1999, que se observa en los gráficos 1 y 2, obedece al fenómeno descrito anteriormente.

En efecto, el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos reportó que, para el año 2009, 32 de los 64 municipios nariñenses alojaban cultivos de uso ilícito, proporción que colocaba al departamento en el primer lugar nacional por área sembrada de coca, y a Tumaco como la localidad colombiana con mayor área sembrada de esa planta (Simci, 2010: 81). De igual manera, ya en 2001 la Armada Nacional reportaba la existencia

de cien laboratorios en territorio nariñense⁵ (Armada Nacional, 2001, 29 de mayo). Teniendo en cuenta lo anterior, el desenvolvimiento de la guerra en Nariño puede analizarse en dos etapas del escenario de disputa (1999-junio de 2010). La primera va de 1999 a 2005 y la segunda de 2005 a junio de 2010. Si bien la tendencia de ambas etapas es similar en la región, el comportamiento de los grupos armados varía para cada una de ellas, en particular en el caso del ELN.

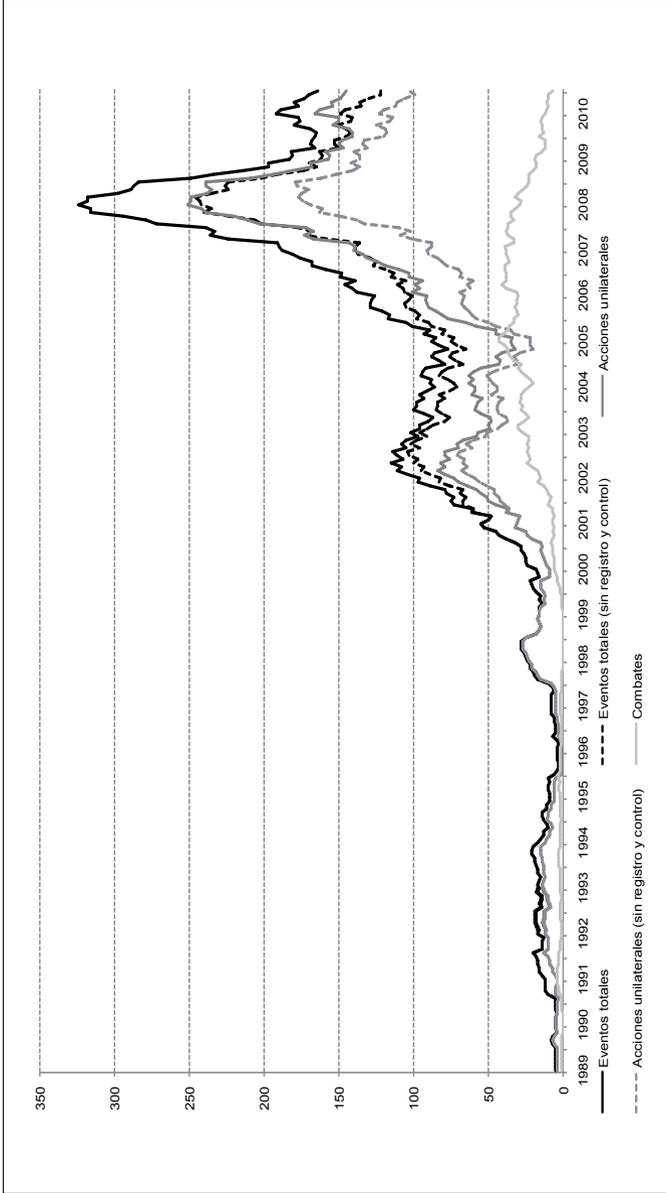
La primera etapa del escenario de disputa cubre desde 1999 hasta 2005. Como se aprecia en los gráficos 1 y 2, en 1999 se hace evidente la escalada de eventos de conflicto y de víctimas registradas, que desbordan los acumulados históricos. En esta primera etapa del escenario de disputa los paramilitares, las fuerzas estatales y las Farc son los actores armados centrales.

La estructura paramilitar que hizo aparición en el departamento desde el año 2000 fue el Bloque Libertadores del Sur, que estuvo vinculado al Bloque Central Bolívar (BCB). La incursión del paramilitarismo en la región obedeció a la creciente importancia estratégica adquirida por el departamento como escenario propicio para el cultivo, procesamiento y tráfico de narcóticos. La presencia paramilitar, inicialmente focalizada en algunas zonas, se transforma luego en una realidad mucho más significativa, evidenciada en las disputas entabladas –en particular con las Farc– en zonas sensibles para el tráfico de base de coca, incluidas las de producción y los puertos de exportación. Los grupos paramilitares entran en confrontación directa con las Farc en Barbacoas, Tumaco, Túquerres, Ricaurte y Francisco Pizarro, donde se hacen al control de la mayoría de los laboratorios y puertos de embarque sobre el Pacífico. Fuentes consultadas en el campo señalan la cercanía entre los grupos paramilitares presentes en Nariño y las estructuras dominantes del narcotráfico instaladas en el Valle del Cauca.

Como muestra el Gráfico 3, son los paramilitares y las Farc los que más acciones unilaterales registran, seguidos de las fuerzas estatales, que marcan un aumento sostenido desde el año 2003. En los años comprendidos entre 2000 y 2003 el conflicto alcanza su mayor expresión en términos de muertes totales (Gráfico 2). Esto encuentra asidero en el aumento y recrudecimiento de la violencia entre los grupos armados

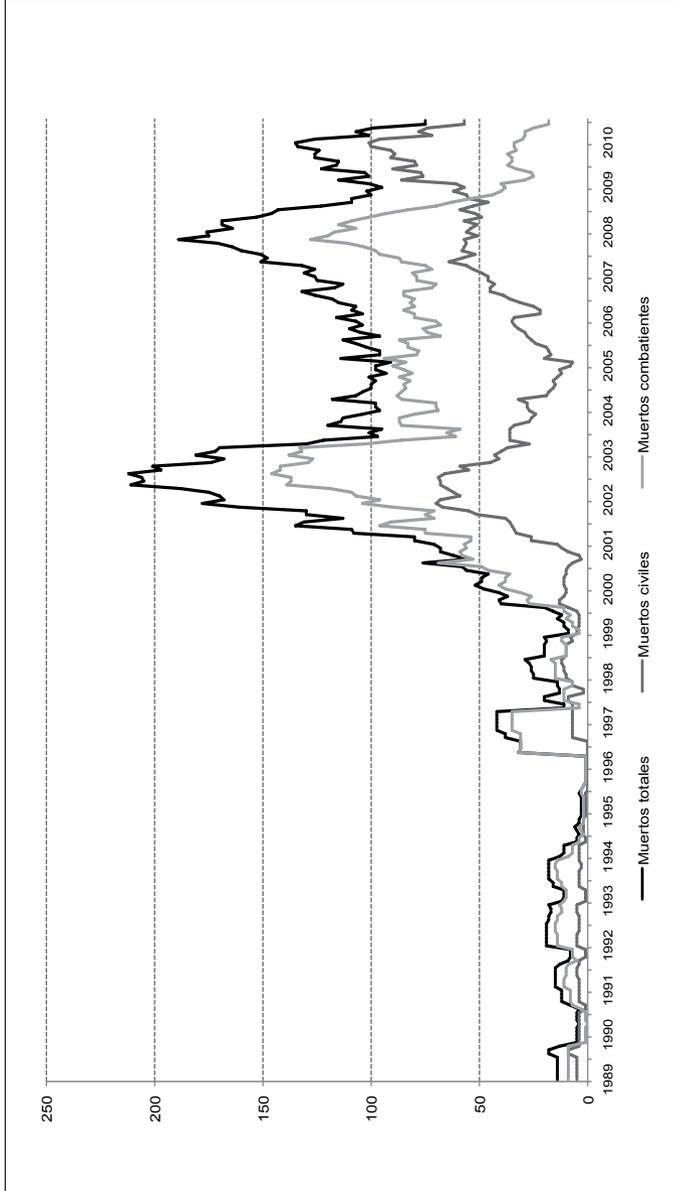
⁵ Véase: Armada Nacional. (2001). “31 laboratorios desmantelados en Nariño por las Fuerzas Militares”. 29 de mayo. Disponible en: <http://www.armada.mil.co/index.php?idcategoria=3532>. Fecha de consulta: 16 de junio de 2008.

Gráfico 1
Eventos totales (con y sin registro y control), combates y acciones unilaterales, 1988-2010



Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

Gráfico 2
Muertos totales, civiles y combatientes 1988-2010



Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

no estatales, específicamente el Frente 29 de las Farc y los paramilitares, particularmente en las zonas del piedemonte costero y que alcanzan su máximo en el año 2001. En 2002 la situación es similar, pero los combates se concentran sobre la Costa Pacífica, en prosecución de las disputas por el control de las rutas de transporte y exportación de base de coca. De igual manera, la ofensiva estatal desplegada, entre otras regiones, en el Putumayo, tuvo como consecuencia la reubicación en Nariño de combatientes de esa región, en particular las Farc, lo cual condujo a un incremento de las acciones unilaterales de esta agrupación. En los primeros años del nuevo milenio se tornan comunes las acciones de sabotaje de la estructura productiva y el ataque a poblaciones y estaciones de policía.

Por su parte, la ofensiva estatal contra las Farc también se desplaza del Putumayo al departamento de Nariño. Como se observa en el Gráfico 4, las fuerzas estatales y las Farc son los grupos que registran los más altos niveles de combate, no solo en esta etapa sino a lo largo de todo el período analizado.

Considerando toda la serie, como puede notarse en el Gráfico 3, el ELN ha tenido una intervención considerablemente menor que las Farc y las fuerzas estatales. El alza de sus acciones en 2001, evidenciada en el Gráfico 3, está relacionada con el incremento de acciones de sabotaje a la infraestructura productiva, las voladuras del Oleoducto Trasandino y los combates y emboscadas contra las fuerzas estatales. Después de 2001 la participación del ELN decae de manera sostenida, hasta el final de la serie. A su vez, como se observa en el Gráfico 4, los combates entre las fuerzas estatales y el ELN, y entre éste y los paramilitares, son significativamente menores que los que se registran con las Farc. Esto puede dar cuenta del hecho de que el ELN había hecho presencia en la región desde los años ochenta, pero no había enfrentado retos bélicos importantes. Ellos llegarían al finalizar la década de los noventa, en coincidencia con el arribo del paramilitarismo y el aumento de combatientes de las Farc provenientes del Putumayo, dispuestos a disputar la nueva región privilegiada para el cultivo, procesamiento y comercialización de drogas de uso ilícito. Lo anterior ratifica que, para el ELN, Nariño constituía un escenario de refugio y no de confrontación militar y expansión, como lo son los departamentos de Arauca y Norte de Santander.

Otra expresión destacada del ELN en esta etapa alude a su confrontación con las Farc. Como se observa en el Gráfico 4, los combates entre las Farc y el ELN se registran desde inicios de 2002, y aunque no son

significativos en términos cuantitativos y disminuyen drásticamente al final del período, ponen de presente una situación común a otras regiones estudiadas, como en Arauca, dónde también se enfrentan estas dos guerrillas aunque con mayores niveles de violencia y victimización.

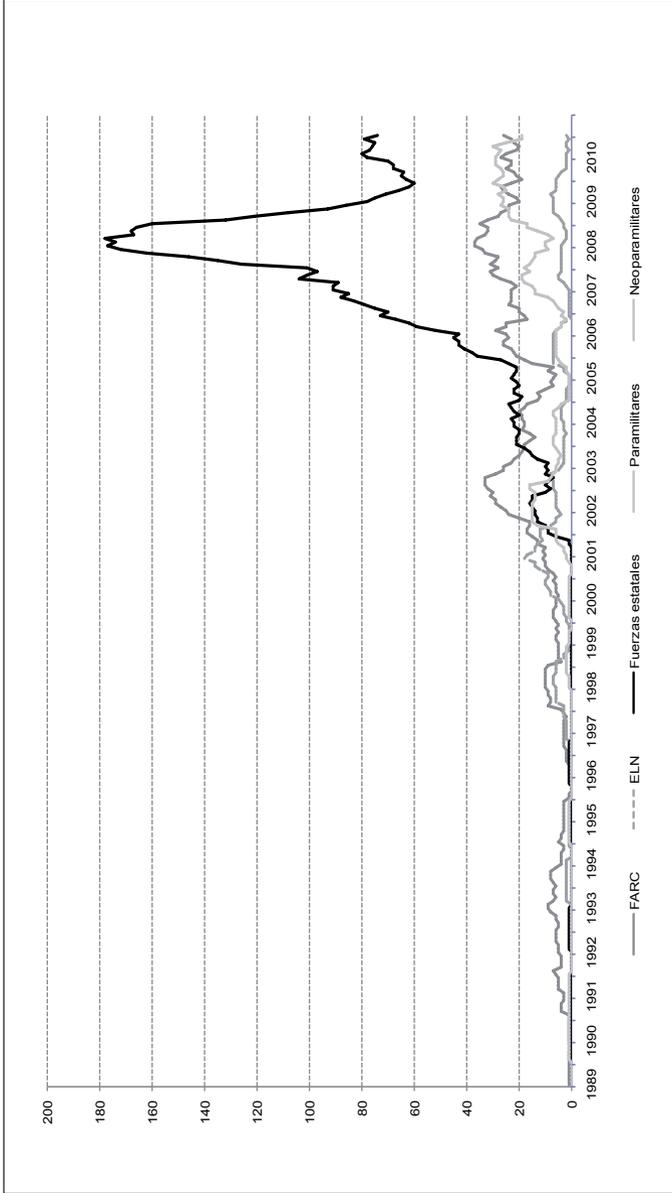
En esta primera etapa, los datos anteriores muestran la incapacidad del ELN de mantenerse vigente en el desenvolvimiento del conflicto, en la medida en que no puede tener una participación constante en un escenario que le resulta desfavorable: el acoso de actores estatales, las huestes paramilitares y la disputa por zonas estratégicas entre todos los grupos armados no estatales afectaron su capacidad de adelantar acciones unilaterales, dada la gradual reducción de su capacidad militar.

El último elemento destacado del tránsito a la segunda etapa (2005-2010) es la desmovilización en el año 2005 del Bloque Libertadores del Sur, que desde 2003 estaba en cese virtual de hostilidades como producto de las negociaciones entre el gobierno y los paramilitares. Como muestra el Gráfico 1, el cese al fuego se vio reflejado en una reducción del nivel de violencia de conflicto. Sin embargo, con posterioridad al DDR, surgieron nuevos grupos armados ligados a los antiguos grupos paramilitares y a carteles del narcotráfico, los cuales agregaron nuevas expresiones a la guerra desplegada en Nariño, que se van a evidenciar en las alianzas con otros grupos armados y en el incremento de su actividad.

De esta primera etapa podemos destacar entonces que la violencia se incrementa a partir de la configuración de un clúster del narcotráfico en la región, proceso de configuración iniciado en 1999. De igual manera se resalta que los grupos armados centrales de la contienda son las Farc, las fuerzas estatales y los paramilitares, al lado de una actividad relativamente baja del ELN.

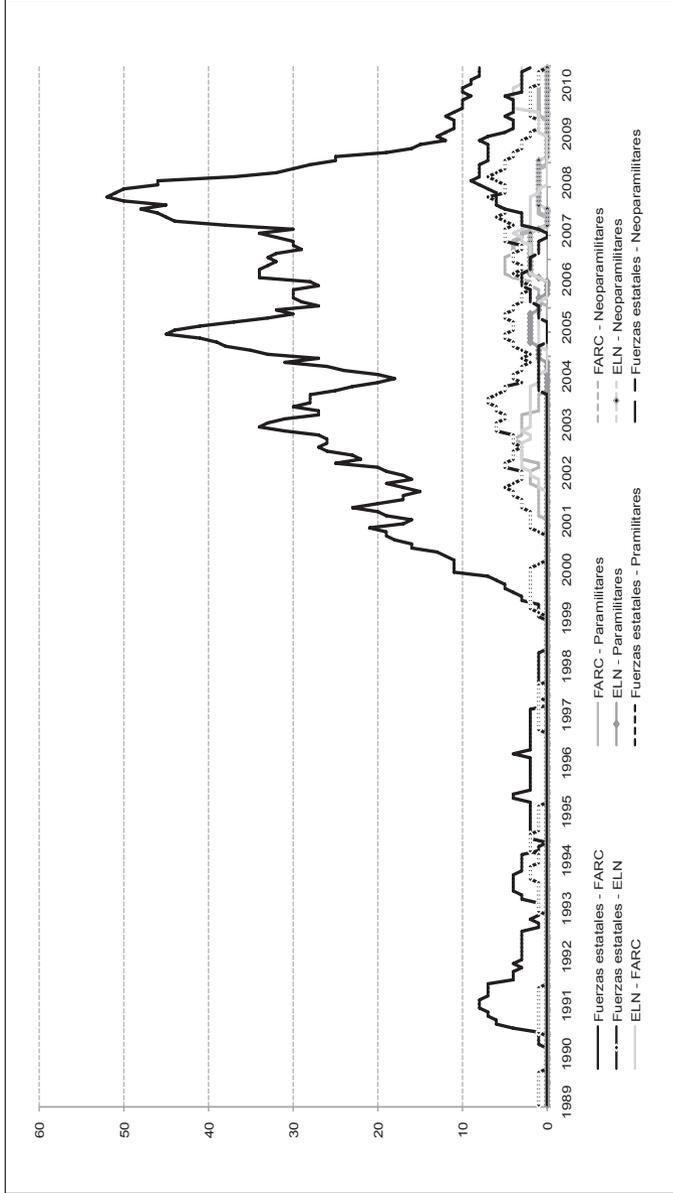
Ahora bien, la segunda etapa (2005-junio de 2010) se puede caracterizar con apoyo en tres hechos. El primero es la presencia de neoparamilitares vinculados al antiguo paramilitarismo y a los carteles del narcotráfico. Los Rastrojos, las Águilas Negras, las Autodefensas Campesinas de Nariño y los Urabeños incrementaron las disputas con las guerrillas por la posesión de corredores estratégicos para el tráfico de drogas (Indepaz, 2010; Ávila y Núñez, 2008, 14 de diciembre). El segundo se refiere al incremento de la victimización de la población civil (Gráfico 2), en particular de comunidades específicas, como los indígenas y los afrodescendientes. Finalmente, y como resultado de la emer-

Gráfico 3
Acciones unilaterales en Nariño, por grupo participante, 1988-junio de 2010



Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

Gráfico 4
Combates por días en Nariño, 1988-junio de 2010



Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010.
Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

gencia de grupos neoparamilitares, una característica de esta segunda etapa, fundamental en el análisis del ELN, son las alianzas que se han desarrollado entre los grupos armados. En particular, la Alianza entre Los Rastrojos y el ELN para beneficiarse del tráfico de drogas, tornan más compleja la dinámica de la guerra y son factor fundamental para la caracterización del conflicto armado de los últimos años en las regiones donde la economía cocalera es prevaleciente

En términos generales, la presencia de grupos paramilitares provocó la intensificación del conflicto armado en el período 2005-junio 2010. En el Gráfico 3 puede notarse que las acciones unilaterales de estas agrupaciones se incrementan constantemente a partir del año 2006 y hasta el final de la serie, a tal punto que en los últimos años superan incluso las de las Farc y sus antecesores, los paramilitares. Las acciones de los neoparamilitares están enfocadas en recuperar los espacios dejados por sus antecesores, que en algunos casos habían sido copados por la insurgencia, y en mantener bajo su dominio los corredores estratégicos para el tráfico de drogas que les disputan otros grupos armados no estatales. Es en este contexto de recuperación y mantenimiento de control territorial que la población civil se ve afectada.

De igual manera, desde 2005, como se observa en el Gráfico 3, han crecido las acciones de las fuerzas estatales en el departamento, debido en parte al hecho de que el departamento, una vez se integra militarmente, adquiere una centralidad estratégica para el Estado, en particular a causa de sus altos niveles de violencia y su conversión en el departamento colombiano con mayor área de cultivos ilícitos. Esta centralidad estratégica en la guerra ha incrementado la ofensiva estatal⁶ y, como consecuencia de ello, la intensidad del conflicto, que alcanza su máximo global en 2007 (Gráfico 1).

Victimización a comunidades específicas

La intensificación del conflicto armado en esta etapa produjo un mayor impacto sobre la población civil. La creciente disputa por zonas estratégicas de la región, la mayoría ligadas al narcotráfico, así como la ofensiva gubernamental, han aumentado las agresiones contra la población civil,

⁶ Los principales son: Operativo Gladiador, Camawari, Libertad 5 y El Nevado. Estas operaciones y la contraofensiva de la guerrilla se desarrollan en territorios de resguardo y están afectando principalmente a comunidades indígenas (Codhes, 2007).

especialmente comunidades específicas como los afrodescendientes y los indígenas (DH Colombia, 2008)⁷.

El pueblo indígena más afectado con la intensificación del conflicto ha sido el Awá, que ocupa un territorio de doscientas diez mil hectáreas de los municipios de Barbacoas, Samaniego, Tumaco, Ricaurte y Roberto Payán. Por su ubicación geográfica en el piedemonte costero y la región andina, estos municipios han sido escenarios principales de la disputa territorial entablada entre grupos armados no estatales y de la ofensiva estatal (fumigaciones y acciones militares), con resultados fatales para la vida de los Awá (*Semana*, 10 de abril de 2007).

El impacto del conflicto armado sobre la población civil puede observarse en las cifras máximas del año 2009 (Gráfico 2), cuando las muertes de civiles superaron las muertes de combatientes. Conviene agregar que en esta etapa (2005-2010), dentro de un total de 173 acciones unilaterales, los grupos armados perpetraron quince masacres y 108 acciones ofensivas que dejaron una o más víctimas civiles (Bdcac-Cerac V.11,1). Lo anterior evidencia que los grupos armados no estatales y estatales, en procura de controlar el territorio y ejercer su dominio, han involucrado gravemente a la población civil.

El ELN tiene responsabilidad en el incremento de la victimización de la población civil. La confrontación con las Farc, que se agudiza de nuevo en el año 2006, así como la ofensiva estatal, han elevado la victimización de civiles por parte del ELN. Un reportaje periodístico describe de qué manera la población civil es empleada como escudo: los Awá “cuentan que en los combates entre las Farc y el ELN han utilizado sus casas para protegerse de las balas. Incluso, han entrado al interior de ellas para disparar. Que hay familias que después de estos combates, prefieren desplazarse hacia otros resguardos para buscar seguridad” (*Semana*, 10 de abril de 2007). El pasaje de prensa constata la total vulnerabilidad de estas comunidades dentro de sus territorios como resultado de los enfrentamientos.

El Gráfico 5 muestra que en los años 2008-2009 se presenta una coincidencia entre los muertos totales y los muertos civiles atribuidos al ELN. La mayoría de las muertes causadas por el ELN obedeció a homicidios colectivos e incidentes con minas antipersona y una de las víctimas

⁷ Ejemplo de ello ha sido la constante victimización de la comunidad indígena Awá mediante homicidios selectivos y masacres, registrados por la prensa y organizaciones de derechos humanos. Véase, por ejemplo: “Nueva masacre indígena en Tumaco, Nariño”. Disponible en: <http://www.dhcolombia.com/spip.php?article805>

más afectadas fue la comunidad indígena Awá (Bdcac-Cerac, V. 11). De la observación de la Base de datos del Cerac se puede plantear que las razones por las cuales el ELN puede estar vinculado a la victimización de civiles son dos: motivaciones relacionadas con la regulación del ELN sobre la economía cocalera y retaliaciones del ELN contra la población civil por la colaboración, real o percibida, que brindan al Estado.

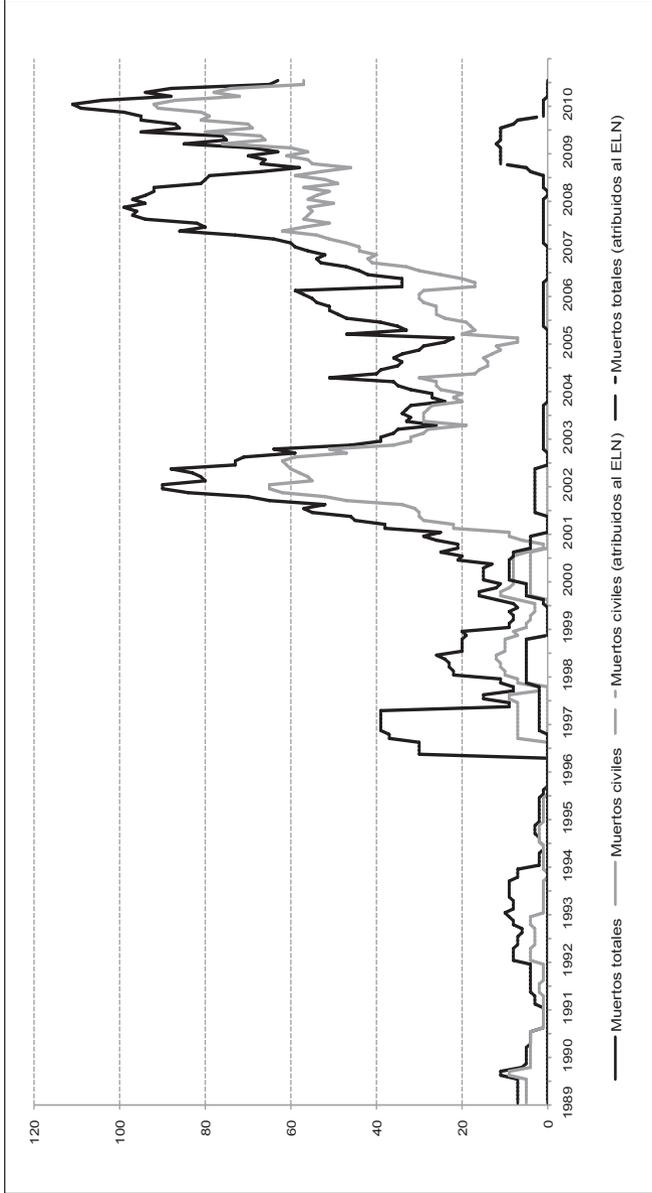
Ahora bien, un efecto no letal de la guerra que ha afectado crecientemente al departamento, y donde puede observarse la victimización de la población civil, es el desplazamiento. El Gráfico 6, que presenta los datos disponibles sobre desplazamiento forzado en Nariño para el período 1997-2010, permite observar que el aumento del fenómeno se inicia hacia el año 2000, cuando empieza un crecimiento vertiginoso de todos los indicadores de violencia y conflicto en la región, en relación, mayoritariamente, con la disputa por las rentas de la economía cocalera. La relación entre desplazamiento forzado y violencia asociada al conflicto que sugieren los datos, dice que la mayoría de los eventos de desplazamiento forzoso han estado relacionados con la disputa de los actores armados por hacerse al control de los territorios que permiten la producción y comercialización de drogas ilícitas.

Existe alguna evidencia de otras investigaciones que viene en apoyo de la relación planteada. Por ejemplo, con base en información recogida en trabajo de campo, un estudio señala lo siguiente:

“Se pudo constatar, mediante entrevistas realizadas en terreno a líderes del movimiento campesino en la región, que los desplazamientos forzados no están motivados por el rechazo de los grupos armados frente a los programas de sustitución de cultivos, sino más bien por la lucha constante entre estos grupos por obtener el control de corredores de movilidad militar, zonas que permitan la salida de la droga y puntos económicos importantes” (Aponte, *et al.*, mimeo: 24).

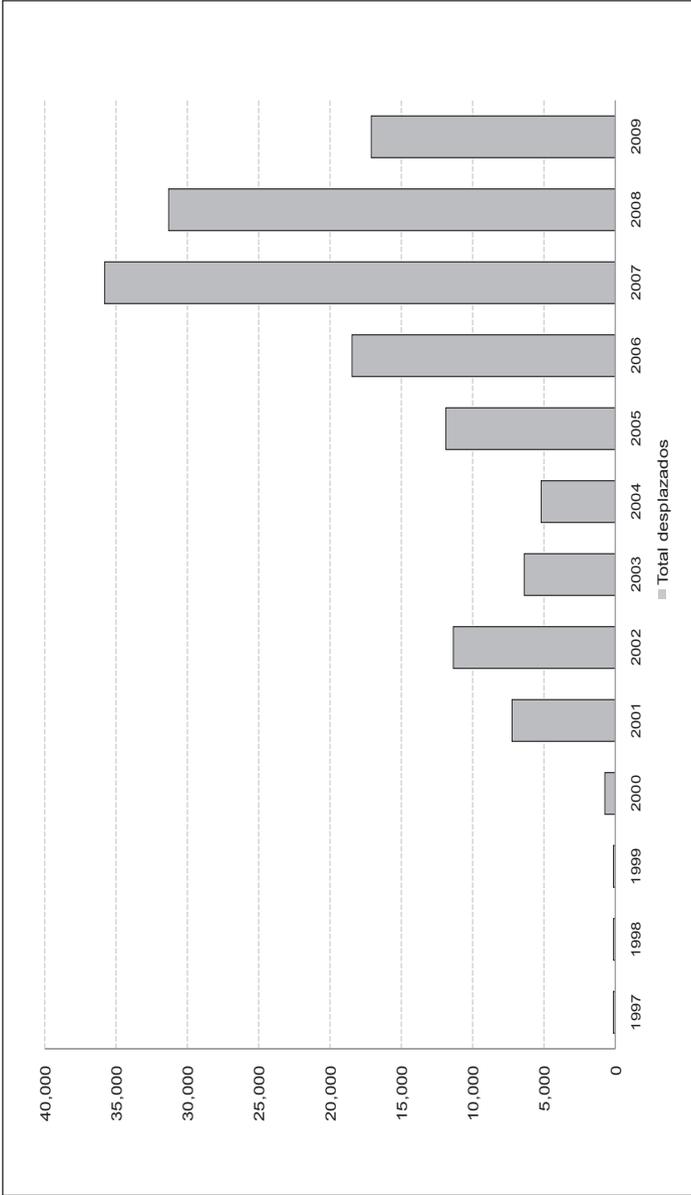
La información del documento citado permite afirmar que la incidencia de las fumigaciones sobre el desplazamiento forzado ha sido marginal, y que, por tanto, la violencia constituye el factor determinante del comportamiento de las cifras consignadas en el Gráfico 6, específicamente la violencia puesta en marcha por la búsqueda de control territorial para hacerse a las rentas del narcotráfico. Por su parte, a los neoparamilitares se les atribuye una importante participación en procesos de desplazamiento masivo (particularmente por disputas sobre la salida al mar). Los registros del Sipod señalan que en el período 1997-

Grafico 5
 Muertos totales y muertos civiles (en acciones unilaterales); muertos totales y muertos civiles atribuidos al ELN (en acciones unilaterales), 1988-2010



Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

Gráfico 6
Desplazamiento forzado en Nariño, 1997-2009



Fuente: Sipod. Datos procesado por el Cerac.

2009 fueron desplazadas 145.852 personas como resultado de procesos originados por enfrentamientos, dentro de las cuales se destaca, una vez más, el ensañamiento contra comunidades indígenas y afrocolombianas (DH Colombia, 12 de febrero de 2009)⁸.

Prevalencia de lógicas económicas del ELN y retaguardia estratégica

Ahora bien, como dijimos atrás, una segunda característica del período 2005-junio de 2010 son las alianzas que se han pactado entre los grupos armados no estatales. La configuración de un clúster de narcotráfico en la región trajo consigo un relacionamiento particular de los grupos armados con la cadena productiva del narcotráfico. Como señala Reyes Posada, la relación de tales agrupaciones con el narcotráfico consiste ahora en el ejercicio de dominios territoriales que buscan más asegurar sus intereses militares y rentísticos que asumir las reivindicaciones sociales y políticas de los pobladores, para el caso de las guerrillas, o de librar una lucha contrainsurgente, para el caso de los neoparamilitares. Esta situación hace más confusa la línea divisoria entre la estructura del narcotráfico y las dinámicas emergentes del conflicto armado, sobre todo en la región del corredor pacífico (Reyes Posada, 2009).

Parte de este nuevo relacionamiento del ELN en Nariño son las alianzas con los grupos neoparamilitares. En la llanura pacífica el ELN ha desarrollado alianzas con Los Rastrojos, con el objetivo de mantener su presencia y acceder a rentas derivadas del narcotráfico, que pueden permitirles algo más que sobrevivir. El ELN ha entablado dos tipos de alianzas con organizaciones como Los Rastrojos. Un primer tipo es la alianza por interés común, que en la mayoría de los casos suele ser por el tráfico de cocaína. El segundo tipo se presenta por el enfrentamiento con un enemigo común, es decir, mediante pactos expresos orientados a combatir a un tercero⁹ (Ávila y Núñez, 2008: 52). Estas alianzas, “según

⁸ Véase: “Exterminio y terror afronta la comunidad indígena Awá”. Disponible en: <http://www.dhcolombia.com/spip.php?article730>

⁹ En su investigación sobre expansión territorial y alianzas tácticas (Ávila, A.F., Núñez, M.P., 2008: 54), la Corporación Nuevo Arco Iris plantea tres tipos de alianzas entre los grupos armados: “*Por interés común*: los grupos tienen alguna relación de intereses. Es el caso del bajo Cauca antioqueño, donde la alianza funciona en torno al tráfico de coca; *Por enemigo común*: en este caso existen pactos expresos para combatir a un tercero, es decir, acuerdos de guerra. Se encuentran en Cauca y Nariño, donde el ELN tiene una alianza así con Los Rastrojos, para combatir a las Farc; *De convivencia pacífica*: los grupos mantienen acuerdos tácitos de no agresión. Es lo que prima por ahora en los Llanos Orientales, donde cada grupo opera por su lado; no tienen una relación, simplemente no combaten”.

la policía, se traducen básicamente en pactos de no agresión, custodia de cultivos ilícitos y apoyo bélico y económico en los enfrentamientos con otras estructuras ilegales” y legales (*La F.M.*, 9 de marzo de 2010).

Los frentes involucrados en tales acuerdos son los que tiene presencia en el piedemonte occidental y en la llanura pacífica del departamento, específicamente los frentes Héroes y Mártires de Barbaocoas y Guerreros de Sindagua. Fuentes consultadas en la región coincidieron en señalar que existe una alianza entre Los Rastrojos y el ELN, que se materializa en regiones donde se concentra un gran número de cultivos de uso ilícito, así como laboratorios y rutas para la exportación de la cocaína. En efecto, es posible encontrar una coincidencia entre tales cultivos y las áreas de operación de los frentes mencionados, principalmente en los municipios de Tumaco y Barbaocoas. En estas localidades también operan Los Rastrojos, grupo que tiene vínculos estrechos con el cartel del norte del Valle.

Las implicaciones que tales alianzas acarrearán para el ELN son diversas. En primer lugar, sus asociaciones con los grupos neoparamilitares pueden resultar en un fortalecimiento de la operatividad militar ‘élena’, pues las rentas derivadas del narcotráfico hacen posible un abastecimiento de armas y viable la tarea de reclutar combatientes para sus estructuras¹⁰. Al comparar el número de combatientes del ELN en 2006 y en 2009, la Corporación Nuevo Arco Iris da cuenta de esta tendencia con estas palabras: “El total de tropa que mantiene el ELN en Nariño supera los 300 hombres, cuando hace tres años no eran más de 80” (Ávila y Núñez, 2010: 29).

No obstante, tales alianzas no suponen necesariamente un fortalecimiento de su actividad militar. Es forzoso preguntarse entonces: ¿por qué, como puede notarse en los gráficos 3 y 4, en el lapso 2005-2006 el ELN mantiene tan baja actividad militar si, como señala la Cnai, ha aumentado su pie de fuerza y además percibe ingresos del narcotráfico, producto de sus alianzas con Los Rastrojos? Esta pregunta tiene sentido si se considera que en el ELN los procesos de financiación han

¹⁰ Algunas muestras de este resurgimiento se presentaron a fines de 2010. En los meses de agosto y septiembre el Frente Comuneros del Sur realizó acciones (dos emboscadas y un ataque con explosivos) contra la fuerza pública. Ver los comunicados disponibles en: http://occidenterebelde.org/comunicados/comu2010_030.html; http://occidenterebelde.org/comunicados/comu2010_029.html; http://occidenterebelde.org/comunicados/comu2010_028.html

estado estrechamente relacionados con los de expansión y actividad militar, como ocurre en el departamento de Arauca. En esta región el Frente Domingo Laín, mediante extorsiones a las empresas petroleras, logró financiar la expansión de la organización guerrillera a Norte de Santander y al sur de Bolívar, además de costear su estructura militar y mantener una actividad bélica constante, como se verá más adelante. Teniendo en cuenta lo anterior, surge otro interrogante: ¿cómo se están distribuyendo las rentas derivadas del narcotráfico en la organización? La respuesta a ambas preguntas puede estar relacionada con lo que en este estudio se propone como una segunda implicación, producto de las alianzas entre el ELN y Los Rastrojos, y es la prevalencia de lógicas económicas producto de la economía cocalera sobre las lógicas de “construcción de poder popular”.

Cada vez más, las estructuras del ELN en la región se ven involucradas en acciones violentas más propias de la disputa por las rentas de las actividades productivas de la economía cocalera y menos asociadas a la maximización del control territorial insurgente con el objetivo de lograr influencia en la población civil y avanzar en la guerra contra el Estado. En este sentido el ELN pasa a un escenario complejo de disputas territoriales donde el narcotráfico emerge como el catalizador de la confrontación y como configurador de su actuación respecto del territorio.

De lo anterior se destaca entonces que ELN ha tendido a involucrarse en expresiones propias del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, a través no solo del control sobre algunas de las fases de la cadena productiva de éste, sino también, como ya se mencionó, mediante la concertación de alianzas con grupos dedicados principalmente a esta actividad, como Los Rastrojos. Lo anterior puede derivar en la conversión de una organización revolucionaria en una organización fragmentada vinculada al narcotráfico. Es decir, las estructuras del ELN ubicadas en la subregión que conforman el Andén Pacífico nariñense y el piedemonte occidental del mismo departamento, presentan una tendencia a actuar bajo lógicas de depredación de rentas producidas en un circuito económico ilícito.

Las estructuras del ELN que se ubican en la región del altiplano y en algunos municipios del piedemonte occidental del departamento operan con otra dinámica. Allí operan los frentes Comuneros del Sur y Camilo Cienfuegos y la compañía Toño Obando, que hacen presencia en los municipios de Samaniego, Llanadas, Los Andes, Santa Cruz, Llanada, Guachávez y Cumbitara. La expresión violenta de los frentes ubica-

dos en el área cordillerana parece estar más relacionada con el objetivo de sobrevivir mediante el empleo intensivo de minas antipersona en sus lugares de presencia histórica; además, la presencia histórica del ELN, vinculada más al trabajo organizativo, así como la propia dinámica organizativa social y comunitaria de esos territorios, promueven en esos municipios una expresión diferenciada de la guerra respecto a lo que se observa en el occidente del departamento. De ahí la posibilidad de que allí se presenten acciones de movilización por la paz y de humanización de la guerra, como se expondrá más adelante.

Planteado lo anterior, puede aventurarse la hipótesis de que en la subregión cordillerana se ha reducido la capacidad bélica del ELN, de tal forma que actualmente no hace más que sobrevivir en los territorios en los que históricamente ha tenido influencia sobre la población civil y en aquellos en los que ha logrado mantener retaguardias estratégicas. El ejemplo más representativo de lo anterior es Samaniego (véanse los recuadros siguientes). Allí el ELN ha optado por refugiarse en la parte más alta de la montaña y protegerse de la ofensiva estatal y de otros grupos armados mediante el recurso intensivo a las minas antipersona. Tal estrategia se ha traducido en una alta victimización de la población civil, que, además de ser afectada cada vez que alguien cae en uno de esos artefactos, en varias oportunidades ha sido obligada a confinarse en sus territorios, sin acceso a alimentos. Lo anterior quiere decir que en la zona de la cordillera el ELN ha optado por salvaguardarse de la ofensiva estatal y de las disputas con otros grupos armados no estatales, muchas veces a costa de su relación con la población civil, acosada por el asedio indiscriminado de armas como las minas (véanse recuadros en páginas siguientes).

El ELN: descocalizar la guerra, politizar el diálogo

¿Qué implicaciones tienen los factores y dinámicas descritos para poner fin a la confrontación armada con el ELN? Lo primero que habría que decir es que esa guerrilla no marca la dinámica del conflicto armado en la región, sino que éste, como se observó para todo el período, está determinado por el accionar de las fuerzas estatales, las Farc y los neoparamilitares. En este sentido, una paz parcial con el ELN no modificaría mayormente la situación en la región.

No obstante, en este capítulo se destacaron algunos procesos que sugieren que, a pesar de que no cambiase significativamente la dinámica de la guerra y la situación en la zona, una paz parcial con el ELN se-

Pacto local de paz y movilización ciudadana en Samaniego

Durante el mes de enero de 2004, en cabeza del alcalde del municipio de Samaniego, el doctor Harold Wilson Montúfar, se hace oficialmente el lanzamiento de la Propuesta de Paz y Convivencia, donde los samanieguenses exigen a los grupos armados al margen de la ley presentes en el territorio (Farc, ELN y AUC) una propuesta de solución política al conflicto armado, de negociación y de acuerdo de paz, que se contextualicen con los procesos de paz adelantados por el Gobierno Nacional. Los samanieguenses proponen, así, un PACTO LOCAL DE PAZ, que contará con la participación decidida de todos los ciudadanos, instituciones en general y organizaciones sociales. El Pacto nace como un instrumento de gobernabilidad y proyecto de vida para la población de Samaniego. Es una propuesta que plantea un nuevo modelo de crecimiento, desarrollo y paz que pretende llevar a su población a una sana convivencia como plataforma para un mejor vivir.

El Pacto Local de Paz no es más que una exigencia que los samanieguenses hacen a los violentos para que se respete la vida, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la sana convivencia, y se declaren neutrales, autónomos e imparciales frente al conflicto armado que vive Colombia. No reconocen la violencia ni la guerra como método para la solución de conflictos. En cambio, apoyan la solución pacífica negociada y piden que se declaren los sitios públicos ya mencionados, lugares de paz intocables. Es una propuesta que expresa a los grupos armados al margen de la ley que el pueblo samanieguense quiere un espacio para la gobernabilidad y el encuentro con la vida dentro de un proceso de recuperación del Estado Social de Derecho con justicia social y que se respete la vida y la integridad de las personas. Ello se expresa con un "NO QUEREMOS UN PUEBLO EN GUERRA".

Esta iniciativa de paz ha obtenido importantes resultados. Algunos son:

- Desde la realización de los comunicados en junio del 2004, los grupos armados (ELN y AUC) presentes en la zona, respetaron y cumplieron sus compromisos con la ciudadanía samanieguense para reducir sus acciones armadas de guerra e intensificar sus acciones de vida, de diálogo y voluntad de paz.
- Fueron más de 20 meses de cese de hostilidades en el casco urbano. En los primeros siete meses del año 2005 se reportaron doce (12) muertes violentas por arma de fuego, contra veintiséis (26) del mismo período en el año 2004. Esto significa una reducción del 53.8% en la criminalidad, o sea, evitaron 14 muertes violentas.
- La reducción de acciones armadas es considerable (50% de reducción), ya que en años anteriores anualmente los grupos armados realizaban de 4 a 6 acciones armadas de alto poder destructivo (muertes, heridos, daños de la infraestructura). La reducción de la criminalidad es evidente y es un resultado positivo en medio del conflicto armado.
- Disminución del número de secuestros. En enero del 2005 se presentó el secuestro de un dirigente político (abogado Héctor Bastidas), frente a más de ocho (8) en el mismo período del año anterior.

Petición de frente

La gente confinada se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidieron buscar ellos mismos una solución. Entonces se reunieron con los guerrilleros del ELN y les hicieron saber su malestar con el minado en su región. Conscientes de las cifras, los habitantes de aquellas montañas les dijeron a los guerrilleros que ellos estaban llevando la peor parte de su guerra. Las mismas estadísticas dan cuenta de que quienes pisan más explosivos son los civiles y no los militares, que eran los adversarios de los guerrilleros. “¿Ustedes están haciendo la guerra contra nosotros o contra quién?” fue, a grandes rasgos, el reclamo.

La presión fue tal, que el ELN accedió a retirar 35 minas de la vía principal y les dijo cuáles caminos estaban minados y cuáles no. Así fue como, para comienzos de 2009, la gente pudo moverse con más tranquilidad. Eso sí, los hombres armados les advirtieron que al mínimo asomo de militares o cualquier adversario suyo por la zona, activarían de nuevo los campos minados sin decirle a nadie la ubicación de las minas y volvería su confinante régimen.

También se había hecho común que el grupo guerrillero retuviera a personas ajenas a la región y, después de averiguar quiénes eran, las matara a su antojo. Entonces los habitantes les exigieron que no volvieran a hacer eso. “En seis meses, liberamos a seis personas vivas. Eran cuatro jóvenes de El Decio y una pareja que repartía volantes invitando a la desmovilización”, cuenta un líder. Todo fue posible gracias a que “si toca protestar, nos reunimos y protestamos contra ellos”, explica un habitante de la región. Los campesinos están convencidos de que “las únicas propuestas de paz que han servido son los diálogos entre los grupos ilegales y la comunidad”.

El reto para el Estado en una situación como ésta no es menor. La gente sabe cómo defender su vida, pero el gobierno nacional, como se sabe, no ve bien este tipo de negociaciones o diálogos. Y solo está de acuerdo con ellos siempre y cuando los miembros de esos grupos armados ilegales vayan a someterse a la justicia.

Fuente: Mejía, J.E. (2010). “Con valor, campesinos de Samaniego le hacen frente a la guerra”. En *Semana*, 15 de febrero.

ría necesaria. El primer proceso que se quiere destacar es la tendencia a la prevalencia de las lógicas económicas de las estructuras del ELN como producto de su involucramiento en las actividades productivas de la economía cocalera. La injerencia del ELN en este circuito y las alianzas con grupos más criminales que políticos promueven procesos de criminalización de su actividad insurgente y pueden provocar la conversión de una organización revolucionaria en una agrupación fragmentada vinculada al narcotráfico. Este no solo constituye un riesgo y una dificultad central para construir estrategias que persigan una solución pronta y efectiva de la situación, sino que además se corre el riesgo central del incremento de la violencia y la victimización de civiles en el mediano plazo.

El otro proceso, ligado asimismo al involucramiento del ELN en el narcotráfico, es el paulatino fortalecimiento de las estructuras de esta guerrilla y no así mismo de su accionar, producto de las rentas derivadas de ese negocio. Como ya se anotó, el papel del ELN en el desenvolvimiento del conflicto armado en el departamento ha sido secundario. No obstante, a mediano plazo, las rentas derivadas del narcotráfico pueden servir para fortalecer y aumentar su capacidad operativa.

Ahora bien, como se puede observar, en la región cordillerana confluyen dos factores importantes de tener en cuenta en la construcción de estrategias para la terminación del conflicto. La presencia histórica del ELN en la región marca una posible ascendencia sobre algunos sectores de la población y en todo caso, como se señala en el recuadro de atrás, existen vasos comunicantes con la mayoría de la población. El otro factor es que, como producto del recurso intensivo a minas antipersona y la victimización creciente sobre la población civil por estos artefactos, la población ha promovido procesos de movilización destinados a reducir el perjuicio de estas armas y exigir a los grupos armados no estatales que restrinjan su empleo. Estos dos factores son esenciales y hacen que la zona cordillerana sea diferenciada y distinguible de las lógicas que rigen en la llanura del Pacífico. Aprovechar estas cualidades para crear vasos comunicantes entre el ELN, la población afectada por la guerra y el poder local, posibilitaría una politización del diálogo y una descriminalización de las estructuras del ELN.

Teniendo en cuenta lo señalado, una aproximación al desarrollo de diálogos regionales podría sustentarse en tres aspectos: 1. Una campaña de desminado por parte del ELN como muestra de humanización de la guerra. Deberá ejecutarse principalmente en el municipio de Samaniego, el más afectado por este tipo de armas. La medida contaría con el apoyo de la población civil, la cual puede ejercer una veeduría ciudadana del proceso; 2. La escogencia del municipio de Samaniego como zona de concentración en el marco de una negociación con el gobierno, en razón de que ella es una zona donde el ELN tiene todavía una presencia histórica y una ascendencia sobre la población; y 3. La aplicación de estrategias diferentes de la coerción para el tratamiento del fenómeno del narcotráfico en el Andén Pacífico, pues la ofensiva estatal y la disputa entre los grupos armados por controlar el territorio pueden provocar desplazamientos de este fenómeno, como ocurrió en el Putumayo. En ese sentido, una estrategia coercitiva sobre las estructuras del ELN y otros grupos armados no estatales puede producir un efecto globo, que

trasladaría el fenómeno del narcotráfico a las zonas fronterizas externas al territorio nacional (Ecuador) e inclusive internas (Chocó), lo cual implicaría asimismo el traslado del recurso a la violencia organizada que va implícito en este tipo de negocios ilegales.

Arauca: ELN, un gigante con pies de barro¹¹

Escenario de disputas armadas por el control territorial y el poder político

En esta sección se aborda la región de Arauca. Se propone que la violencia y victimización de la población civil promovida por el ELN en Arauca obedece a la pérdida paulatina de la hegemonía política de este grupo insurgente en la región, tanto electoral como de regulación sobre la población. Es decir, la producción de violencia en Arauca se puede comprender por el análisis de los reacomodamientos violentos de las diversas fuerzas políticas locales armadas y no armadas que, con diversas intensidades, se presentan desde 1988, momento en el que tuvieron lugar las primeras elecciones populares de autoridades locales.

Para entender por qué el ELN ha dejado de ser un actor hegemónico en la región es necesario, en un primer momento, desarrollar una contextualización de la configuración de la guerra y del ELN en la región. Posteriormente se describe cómo se ha desarrollado la pérdida paulatina del poder –militar y político– de esta insurgencia en la última década. Para esto se aborda la confrontación armada en clave de disputas por la hegemonía política, centrándose en dos procesos distinguibles pero de iguales implicaciones para el ELN.

El primer proceso está relacionado con la incursión del paramilitarismo, la consolidación de las Farc como fuerza militar importante en la región y la ofensiva estatal. El fenómeno se extiende desde 2001 hasta 2005 y se denomina primera disputa. Un segundo proceso tiene que ver con la confrontación reciente entre las Farc y el ELN, en el cual se abordan los efectos que ella ha tenido sobre la población civil y el papel del ELN en el narcotráfico; a este segundo proceso se le denomina segunda disputa y abarca el período 2005-junio 2010.

¹¹ Esta frase es empleada por Andrés Peñate en su documento “El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado”. Universidad de los Andes. Documento de trabajo No. 15, Paz Pública, 1998.

La configuración de la guerra en Arauca ha ocurrido en la interacción de tres elementos: el rol del Estado central con relación a la economía extractiva y la población; el petróleo y su aprovechamiento como fuente de financiación y expansión de los grupos armados no estatales, y la interacción de los grupos armados no estatales con el poder local y los procesos organizativos de la región.

Antes de los años 80 Arauca era una región de colonización y de frontera en el contexto binacional y se caracterizaba por su economía ganadera y campesina. Con una presencia estatal parcial, “las instituciones apenas cumplían funciones mínimas de integración de la población” (Gutiérrez, 2009: 47) y de provisión de seguridad. Con el descubrimiento del petróleo y la construcción de oleoducto Caño Limón-Coveñas en 1983, la población araucana pensó que las regalías producto de la explotación petrolera mejorarían sus condiciones de vida e integrarían la región a las dinámicas del centro (Salazar, 2004: 27).

No obstante, el papel del Estado central ha estado dirigido hacia el aseguramiento del territorio y no hacia la optimización de las condiciones de vida de la población (Saavedra, 2009: 58). Es decir, el Estado ha tenido como principal objetivo en la región garantizar condiciones para el funcionamiento de la economía extractiva, en particular la del petróleo, y los beneficios económicos que esta industria le proporciona tanto al Estado central como a las empresas multinacionales del sector, sin que los habitantes de la región sean los principales beneficiarios de las actividades económicas que se desenvuelven en los territorios que habitan. El ejemplo más reciente de esta lógica fue la declaración de Arauca como Zona de Rehabilitación y Consolidación hecha en 2002¹². Como lo señala Amnistía Internacional, “aunque la situación en lo que se refiere a seguridad y los derechos humanos ha sido crítica en el departamento durante años, el gobierno prefirió limitar la zona de rehabilitación y consolidación a los tres municipios por donde pasa el oleoducto Caño Limón” (Amnistía Internacional, 2004: 14).

Con la aparición del petróleo en Arauca no solo se evidencia la función del Estado central en la región, sino que también se transforma la

¹² Una Zona de Rehabilitación y Consolidación se entiende como “el área geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales...” (Decreto 2002 de 2002, septiembre 9 de 2002).

relación de los grupos armados con ella, pues empieza a ser concebida como un territorio estratégico para su fortalecimiento y expansión. Este recurso permite la expansión y consolidación del ELN en la región mediante el mecanismo de la captura de rentas, por el camino, ya sea de la extorsión o de redes de corrupción que le permiten desviar hacia esa agrupación los recursos de la explotación petrolera. Además, ofrece al ELN la oportunidad de construir un discurso con alcance nacional respecto de la política petrolera y la soberanía nacional.

Ahora bien, el ELN surge en Arauca a través del Frente Domingo Laín¹³, resultado de los procesos organizativos y reivindicativos de lucha campesina liderados en los años 70 por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en el Sarare (Medina Gallego, 1996: 201).

El Frente Domingo Laín¹⁴ aparece en momentos de crisis del ELN e imprime a la organización un nuevo aire en dos aspectos fundamentales: primero, en su situación económica, y segundo, en sus relaciones con el movimiento popular y campesino. Los dos aspectos marcaron el rumbo del Domingo Laín y del ELN en el futuro. La importancia de ese frente (su autonomía financiera y una fuerte vinculación con la población) lo convirtió en una estructura con alta independencia e incluso distanciada de las orientaciones político-militares del Coce.

Al contrario de lo que sucede en la actualidad con las estructuras de esa guerrilla presentes en Nariño, el Domingo Laín contribuyó a la expansión y crecimiento de la estructura y la operatividad militar del ELN a través de la redistribución de las rentas obtenidas. Como consecuencia de su constante actividad extorsiva de las compañías petroleras y de la captura de dineros públicos, pudo financiar el crecimiento y la expansión del ELN en regiones como los Santanderes, el sur de Bolívar y el Cesar.

¹³ Esta versión del surgimiento del Frente es consistente con declaraciones del comandante Pablo cuando dice: "el acumulado social pare un brote revolucionario" (Pablo, 2007, 14 de enero), el cual será el pilar fundacional del Frente Domingo Laín. Este frente hace su aparición pública en 1981 con la toma de Betoyes, en el municipio de Tame.

¹⁴ Actualmente el Frente Domingo Laín comparte su zona de operaciones con la Compañía Móvil "Simacota". Otra compañía con presencia en Arauca es la "Capitán Pomares", que opera principalmente en Casanare pero ha ejercido influencia en la zona suroccidental del departamento (Espejo, G., Garzón, J., 2005: 32). También tiene influencia en territorio araucano el Frente "Efraín Pabón Pabón", el cual opera además en el sur de Norte de Santander y el nororiente de Boyacá.

Tener en cuenta la independencia histórica del Domingo Laín respecto del Coce es fundamental para comprender la configuración de la guerra en la región y para concebir estrategias de reducción de la violencia y terminación del conflicto, pues se trata de una de las estructuras que más se ha salvaguardado desde la ofensiva estatal de 2002. Un ejemplo de la independencia del ELN respecto al Coce se puede observar en un documento de 1989 denominado “La militancia del Domingo Laín opina”, en el cual la dirección del frente hace conocer del Coce las siguientes concepciones:

“La dirección del Frente ‘Domingo Laín’ define:

1. Solo acatamos las orientaciones que compartamos y que a nuestro juicio se puedan cumplir en el área del Frente; 2. Congelamos la conformación de Aurora en toda el área y la distribución de su periódico; 3. Mantendremos el sabotaje al oleoducto porque no compartimos la negociación ni las treguas; 4. Nos reservamos el derecho a independizarnos económicamente si la organización no cubre oportuna y suficientemente el presupuesto; 5. No desarrollaremos la Propuesta Política en el área ni impulsaremos sus formas organizativas, ni métodos de lucha; 6. Mantendremos el nombre de Ejército de Liberación Nacional (ELN) y no nos acogemos al de Unión Camilista-ELN; 7. Rechazamos los planteamientos sobre Humanización de la Guerra y mantendremos nuestra actitud enérgica contra todos los enemigos del proceso; 8. Nos reservamos el derecho a recibir compañeros de otras estructuras que no tengan un Plan y Objetivos definidos” (citado por Medina, 2009: 496).

De igual manera, es el Frente Domingo Laín el que mejor expresa la estrategia de poder popular adoptada como parte medular del proyecto insurgente del ELN, pues es en Arauca donde se ha influido, con relativo éxito, sobre el poder local por fuera y por dentro de la institucionalidad y donde el ELN cumple un papel fundamental como intermediario político y social (Aguilera, 2006: 263).

La estrategia del Domingo Laín se revela como un aspecto fundamental de la inserción de los grupos armados no estatales y de la producción de violencia en Arauca: la interacción de los grupos armados no estatales con los partidos y líderes políticos. Como lo señala Moreno, “Arauca es uno de los departamentos con los registros más antiguos de alianzas entre líderes políticos y grupos armados ilegales” (Moreno, 2010: 62).

La captura de rentas del petróleo, junto con una larga relación del ELN con sectores sociales y políticos importantes de la región, y la existencia de un Estado central que no regula ni orienta las ganancias de la explotación del hidrocarburo, permitieron al ELN construir una estrategia de captación del poder local, con la cual llega a ser un actor hegemónico en la disputa por el poder político. Peñate señala:

“Arauca era un territorio donde los grupos guerrilleros habían alcanzado un nivel significativo de consolidación de su proyecto de poder (territorial, político y financiero) que, como corolario, mostraba la subordinación de la clase política –representada en los partidos tradicionales y las sucesivas administraciones públicas locales y departamentales– a sus decisiones estratégicas” (Peñate, 1999).

Para alcanzar lo descrito por Peñate, desde el año 1988 el ELN desarrolló una estrategia electoral consistente en influenciar e infiltrar al Partido Liberal y, en menor grado, a otros partidos, con el objetivo de afirmarse en la esfera política y lucrarse a través de la captura de rentas públicas y no solo de las rentas extraídas de la actividad petrolera (Ávila, 2010: 196). Estas características brindan un rasgo central de la configuración del poder local de Arauca, el cual ha funcionado por medio de alianzas con grupos armados no estatales.

Finalmente, dadas las características del Frente Domingo Laín, habría que destacar el papel reciente de los procesos organizativos ante la producción de violencia por parte de todos los grupos armados, estatales y no estatales. Las organizaciones sociales han convivido históricamente con el ELN, lo que ha permitido a esta guerrilla fungir como intermediaria entre las poblaciones y los gobiernos locales y como garante en la tramitación de los conflictos sociales.

Siguiendo a Ortiz, la relación de la población con el ELN ha variado entre la adhesión política y la adhesión por conveniencia política (Ortiz, 2001)¹⁵. Lo anterior ha producido una fuerte represión y restricción por parte del Estado contra los procesos organizativos de Arauca. No obstante, a causa de la fuerte estigmatización por parte del Estado

¹⁵ Estas tipologías las presenta Ortiz en su texto “Actores armados, territorios y poblaciones”, el cual tiene como objetivo reflexionar “acerca de la relación del actor armado con los territorios donde está presente u opera y con las poblaciones con las cuales de una manera u otra interactúa”. El evento que le sirvió de excusa para cumplir su objetivo fue el paro armado realizado por las Farc en el Putumayo en el año 2000 (2001: 67-75). En este capítulo usamos la tipología propuesta por Ortiz porque da cuenta de la relación del ELN con la población civil.

y recientemente de otros grupos armados no estatales, las organizaciones sociales han buscado desligarse de la relación real o percibida que tienen con el ELN. Lo anterior ha hecho que la agenda de los procesos organizativos se centre en la humanización de la guerra a través de la exigencia del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario hecha a los grupos armados en confrontación.

Disputas locales y producción de violencia

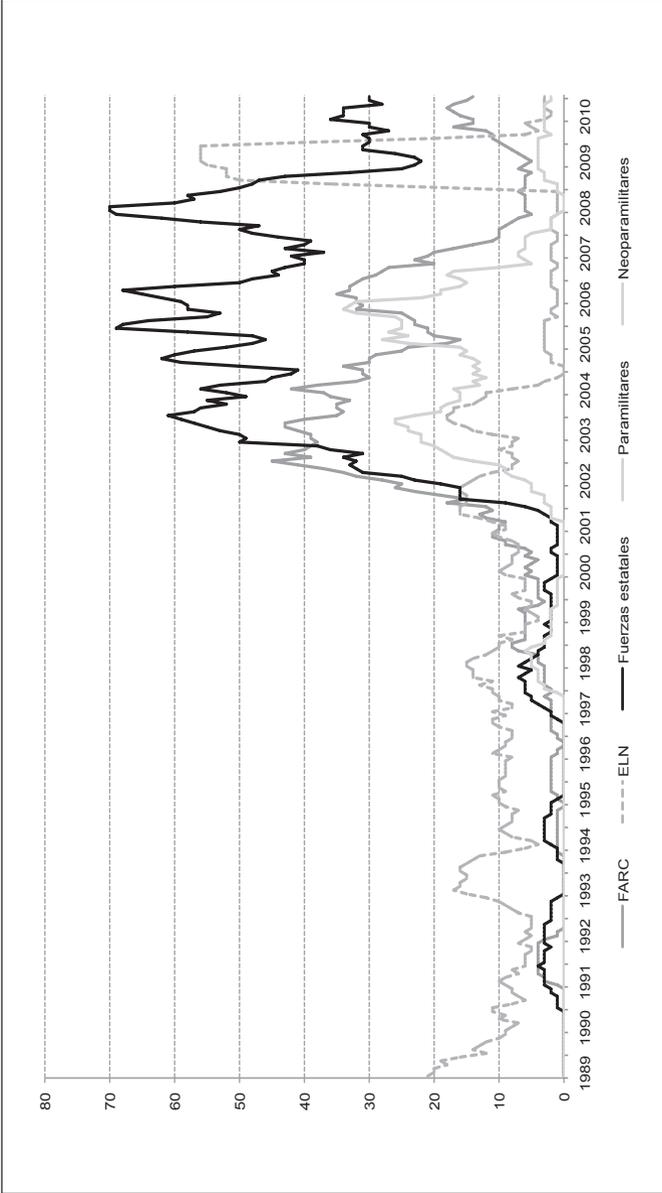
Como se observó al inicio de este capítulo, para entender la dinámica del conflicto armado es necesario abordar la confrontación bélica en clave de disputas por la hegemonía política. Para esto se hará énfasis en la dinámica del conflicto armado entre 2001 y junio de 2010. No obstante, hacer alusión a los años anteriores a este período es relevante para entender el papel del ELN y su paulatina pérdida de poder militar y político

Para efectos de este capítulo es suficiente con mencionar dos aspectos de los años previos a 2001. El primero es que el ELN tuvo en Arauca una participación de primer orden en el conflicto armado desde el inicio de la serie en 1988 hasta principios de 2001, como se observa en el Gráfico 7, al contrario de lo que aparece en Nariño, donde el ELN tuvo, a lo largo de toda la serie, una participación escasa en el desenvolvimiento del conflicto. La importancia del ELN en Arauca puede notarse en el Gráfico 7, que registra una cantidad significativa de acciones unilaterales de su autoría en el período 1988-2001, la mayoría relacionadas con extorsiones, secuestros a las empresas petroleras y atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas (Bdcac-Cerac, V. 11).

El segundo aspecto de los años previos a 2001 aparece en el Gráfico 8, que evidencia una característica importante de este período: los muertos totales coinciden casi enteramente con los muertos combatientes, cosa que sugiere que, antes de 2001, la guerra en Arauca se desarrolló entre combatientes.

Ahora bien, la primera disputa por la hegemonía armada y política, que abarca el período 2001-2005, se inicia con la incursión del paramilitarismo en Arauca, es seguida de la consolidación de las Farc y finaliza con la ofensiva estatal. El ingreso del paramilitarismo en el departamento ocurre en el año 2000, proviene del Casanare y está al mando de los hermanos Mejía Múnera, conocidos como los ‘Mellizos’. El paramili-

Gráfico 7
Acciones unilaterales por grupo responsable, 1988-2010



Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

tarismo se organizó en la región en el Bloque Vencedores de Arauca y en un principio se ubicó en los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, para luego desplazarse hacia Tame.

La incursión del paramilitarismo en la región está relacionada con la aparición, en 1999, de cultivos de coca en la zona rural de Tame y con el interés de socavar el fortalecimiento político que estaban consolidando las guerrillas en la región, en especial el ELN (Observatorio de DD. HH., 2006: 4). La llegada del paramilitarismo se hizo evidente desde mediados del año 2000 “a través del asesinato de campesinos, líderes agrarios y comunitarios, políticos y periodistas” (Observatorio de DD. HH., 2006: 4), y la violencia se agudizó a partir de 2001. Como muestra el Gráfico 7, los paramilitares presentan un incremento de sus acciones desde 2001 y en 2003 alcanzan un máximo local, que es coincidente con el máximo global de muertos civiles (Gráfico 8).

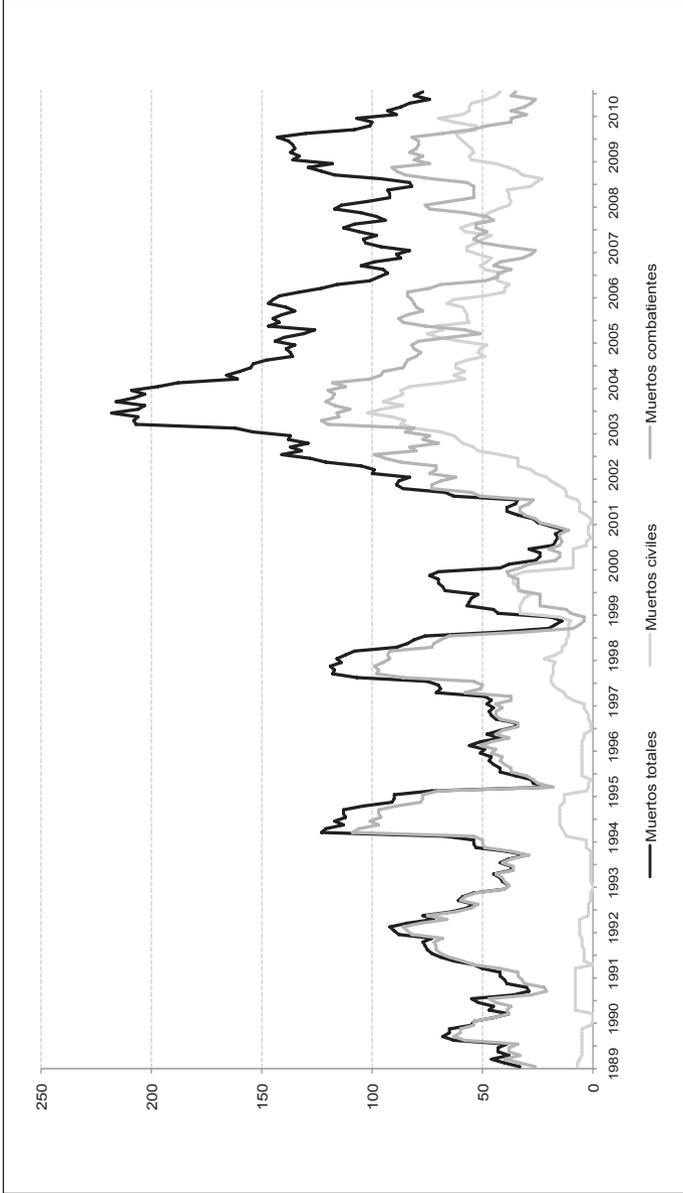
Si bien el paramilitarismo no obtuvo el triunfo militar que alcanzó en otras regiones, logró consolidar alianzas políticas que empezaron a disputar el predominio político regional del ELN. Ejemplo de ello es la presunta alianza entre el Bloque Vencedores de Arauca y Julio Acosta, el líder regional más destacado de Cambio Radical¹⁶, partido que logró consolidarse como fuerza política mayoritaria en 2003 y posteriormente en 2006, con un resultado que solo había obtenido el Partido Liberal mediante alianzas con el ELN (Moreno, 2010: 63).

La ofensiva paramilitar desplegada en Arauca coincide así mismo con la ofensiva estatal. La importancia de esta última puede apreciarse en el Gráfico 7, que muestra, al igual que en las acciones paramilitares, un incremento de las gubernamentales desde 2001. Las fuerzas estatales iniciaron un proceso de reestructuración a partir de 1998, cuando aumentaron su pie de fuerza, modernizaron su estructura organizativa y recibieron más y mejores pertrechos (Granada, Restrepo y Vargas, 2009). Tal proceso de reestructuración tendrá su expresión regional en la creación, en 2002, de la Brigada Móvil No. 5, que confirió mayor capacidad operativa a las fuerzas oficiales y les permitió tomar la iniciativa militar.

La recién adquirida capacidad militar de las fuerzas del Estado contó con el aval político para desarrollar todo su potencial a raíz de la im-

¹⁶ “El 20 de mayo la Fiscalía ordenó la detención del ex gobernador por sus presuntos vínculos con ‘Pablo Arauca’. Ex paras le dijeron a la justicia que Acosta mandó a asesinar al ex registrador Alejandro Plazas” (*El Espectador*, 11 de junio de 2008).

Gráfico 8
Muertos en conflicto en Arauca, 1988-2010



Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

plementación en 2002 de la política de Seguridad Democrática, que contempla una ofensiva generalizada contra las guerrillas. De igual manera, la decisión gubernamental de establecer las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, que incluían tres municipios araucanos (Arauca, Arauquita y Saravena), creó las condiciones políticas y jurídicas para la ofensiva de las fuerzas gubernamentales. Además de esta ofensiva militar, el Estado desarrolló una ofensiva judicial que afectó el predominio del ELN: la denominada Operación Dignidad¹⁷ (2003), que tuvo como objetivo capturar a funcionarios y políticos vinculados con el ELN.

En términos generales, el ELN tuvo una participación de primer orden en el conflicto armado araucano hasta mediados del año 2001, cuando pierde protagonismo frente al aumento pronunciado de eventos con participación de las Farc¹⁸ y de las fuerzas estatales. El Gráfico 7 muestra que desde el año 2000 las Farc presentan un incremento sostenido de sus acciones, que llegan a su máximo global en 2002; esto se debió en parte a que esa agrupación sustituyó al ELN como el grupo que más atentaba contra el oleoducto: en 2001 el conducto fue dinamitado en 271 de los 365 días del año (Entrevista 4)¹⁹. Esto explica en buena parte el aumento de los eventos de conflicto con participación de las Farc registrado durante todo el año 2001, así como el máximo histórico de acciones unilaterales con participación de esa guerrilla a principios de 2002 (Gráfico 7).

De este primer período de disputa se puede concluir que el ELN no logró adaptarse a los retos bélicos que significaron la incursión del paramilitarismo, la ofensiva estatal y la consolidación de las Farc en la región. Esta primera disputa fue el inicio de la pérdida del control sobre el

¹⁷ La Operación Dignidad fue una acción judicial que se realizó en el año 2003 y en la cual 31 personas fueron capturadas. Entre ellas se encontraban el alcalde de Arauca, el presidente de la Asamblea Departamental, la contralora departamental y dos ex gobernadores, entre otros funcionarios, políticos y contratistas. Véase: *El Tiempo*. “Así fue el golpe en Arauca”, 26 de octubre del 2003. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1025974>

¹⁸ Las Farc hacen presencia en la región a través del Bloque Oriental, que tiene en el departamento de Arauca a los frentes 10 y 45, de nombres “Guadalupe Salcedo” y “Atanasio Girardot”, respectivamente. Así mismo, el Frente 28, que tiene asiento en el departamento de Casanare, ejerce influencia sobre la zona suroccidental de la región bajo estudio. Por último, también hacen presencia en el departamento las columnas “Alfonso Castellanos”, “Julio Mario Tavera” y “Reinel Méndez” (Ávila, Gutiérrez y González, 2008: 12).

¹⁹ Según fuentes de campo, el ELN toma la decisión de no dinamitar más el oleoducto Caño Limón-Coveñas a partir del año 2000 (Entrevista 6).

poder político regional experimentada por el ELN, debida a tres hechos: la violencia selectiva contra sus bases sociales y sus líderes políticos ejercida por los paramilitares, las alianzas que forjaron los paramilitares con líderes políticos regionales y la actuación del Estado orientada a desmantelar la red política del ELN en las instituciones gubernamentales de orden regional y local.

Pérdida de hegemonía política y producción de la violencia

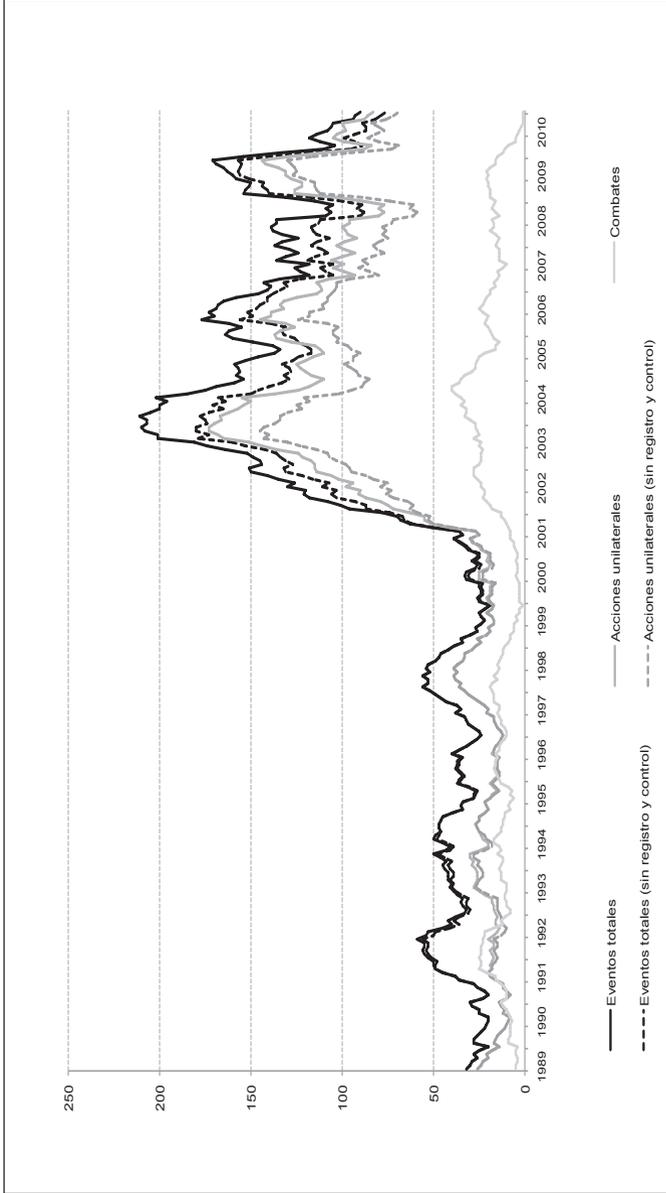
El segundo período de disputa, que va de 2005 a junio de 2010, se caracteriza por la pérdida de hegemonía política del ELN y la consiguiente producción de violencia ligada a ella, que se expresa fundamentalmente en la confrontación entre las Farc y el ELN y en la victimización de la población civil. En este segundo período de disputa el desarrollo del conflicto armado está determinado en parte por tres sucesos: la desmovilización del Bloque Vencedores de Arauca y la emergencia de sus herederos, la continuación de la ofensiva estatal en la región y la confrontación entre el ELN y las Farc.

La desmovilización de los paramilitares en la región tuvo lugar el 15 de diciembre de 2005 y condujo a la disminución de los eventos de conflicto entre 2005 y 2007, como se observa en el Gráfico 9. Con posterioridad al proceso de desmovilización aparecen dos estructuras neoparamilitares, las Águilas Negras y el Erpac, principalmente en los municipios de Arauquita y Tame (Indepaz, 2010). Los neoparamilitares, por lo menos en Arauca, parecen seguir la tendencia que sugieren Granada, Restrepo y Tobón (2009)²⁰: grupos armados que suelen acudir a prácticas violentas de baja intensidad, como asesinatos selectivos y amenazas directas, lo que lleva a una reducción importante de los niveles de violencia.

Ahora bien, como muestra el Gráfico 7, para el año 2008 se registra un máximo histórico de acciones unilaterales del ELN. ¿Cómo pudo acontecer esto si se ha argumentado que el ELN ha tenido dificultades para adaptarse a los nuevos retos bélicos y ha venido perdiendo la hegemonía política? En este análisis se sugiere que el máximo histórico del ELN, observado en el Gráfico 7, puede estar asociado a una reacción por la salida y expulsión de Francisco Galán y las declaraciones del presidente Uribe, quien solicitaba una intensificación de las operacio-

²⁰ No así para todas las regiones, como lo han demostrado hechos recientes registrados en la prensa.

Gráfico 9
Eventos totales, combates y acciones unilaterales en Arauca, 1988-2010



Fuente: Base de datos sobre conflicto colombiano de Cerac, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

nes contra el ELN. Esto sugiere además que la estructura militar de esa guerrilla, si bien ha sido golpeada militarmente, aún tiene capacidad de producir violencia, en particular para hacer eco de peticiones o situaciones del contexto nacional, como es el caso del máximo descrito, o para defender su hegemonía o lo que queda de ella, como ocurre respecto de la confrontación con las Farc (Manosalva, 2008: 43). Evidencia de esto es que el 32% de las acciones que desarrolló el ELN en el país en los años 2008-2010 se llevó a cabo en Arauca.

Se da por sentado que la guerra que se libra entre el ELN y las Farc desde finales de 2005²¹ es ocasionada –más allá del incidente conocido que sirvió como detonante²²– por el desplazamiento del poder político local del ELN y su consecuencia, la pérdida de fuentes de financiación. El desalojo paulatino de la influencia del ELN sobre el poder local, causado por la ofensiva paramilitar y la ofensiva estatal en el período de la primera disputa, no solo ocasionó la disminución de su capacidad operativa y de su influencia sobre el poder local, sino que también produjo la disminución de una importante fuente de financiación. Esto condujo al ELN a buscar otras formas que sustituyeran o complementaran las rentas derivadas de la captura del erario público. En esta búsqueda irrumpe en escenarios que otros grupos armados tienen copados o pretenden copar, reafirmando lo que señala Kalyvas: “la guerra puede originar nuevas escisiones locales porque el cambio de poder a nivel local puede perturbar arreglos delicados” (2004: 62).

Las nuevas escisiones locales, producto del ajuste del ELN a los nuevos escenarios de pérdida de hegemonía, son decisivas para la reactivación o edificación de fronteras entre amigos-enemigos (Tilly, 2007; Gutiérrez, 2009). Como lo señalan Vargas y Vásquez, la perturbación de arreglos o el desalojo de uno de los poderes hegemónicos “se traduce en niveles significativos de violencia contra la población civil, dado que los actores locales tratan de usar el recurso de la violencia para obtener ventajas sobre sus rivales, esto a través de un esfuerzo por direccionar la violencia contra sus rivales locales” (Vargas y Vásquez, 2011: 361).

²¹ La confrontación se oficializó en marzo de 2006. En los links presentados a continuación es posible acceder a un comunicado de las Farc fechado el 23 de marzo de 2006 y a otro del ELN fechado el 26 del mismo mes, donde ambas organizaciones oficializan que están en guerra, entre otras observaciones. Para ver los comunicados consulte: <http://www.cedema.org/ver.php?id=1304> y <http://www.cedema.org/ver.php?id=1380>

²² El asesinato de alias ‘Ché’, miembro del Frente 10 de las Farc por alias ‘Neca’, miembro del Frente Domingo Laín, del ELN.

Como se señala en el primer capítulo, una de las razones que explican una mayor victimización contra la población civil es la pérdida de control sobre la población por parte de un grupo armado, así como la incapacidad de generar adhesiones de civiles en un territorio que ya no es enteramente suyo. De esto resulta una disputa con otros grupos y empiezan los asesinatos selectivos o indiscriminados como forma de provocar terror y mantener el control del territorio (Kalyvas, 2010; Vargas y Vásquez, 2011). Tal parece ser el resultado de la perturbación de la hegemonía del ELN en Arauca.

La victimización de la población civil en este departamento se presenta como una yuxtaposición entre violencia política y violencia privada. Siguiendo a Kalyvas (2004: 53), en la guerra civil hay acciones que están más sintonizadas con los asuntos locales o privados que con la confrontación dominante de la guerra. En el caso del enfrentamiento que libran las Farc y el ELN en Arauca la interacción entre adhesión política y escisión comunal entre clanes familiares conduce y hace posible la continuación y latencia del enfrentamiento violento, por encima de las orientaciones de sus comandancias. Es lo contrario de lo que ocurre en Nariño, donde la victimización de civiles está relacionada con la posibilidad de reproducir, mantener y controlar las diferentes etapas de la cadena productiva de la economía cocalera. Estas variaciones regionales las determina, como se ha observado, la trayectoria de la guerra en la región y la forma de inserción de los grupos armados no estatales en la dinámica de la guerra y la configuración regional.

Perturbación de la hegemonía del ELN: violencia contra la población civil y narcotráfico

La perturbación de la hegemonía del ELN en la región ha conducido a dos procesos: el primero es la creciente victimización de civiles, cuyo número, como se ve en el Gráfico 8, crece entre 2008 y 2010 y para el final de la serie supera incluso el nivel de muertos combatientes; el segundo proceso está relacionado con las consecuencias que tiene la pérdida de fuentes de financiación del ELN y su relación con el narcotráfico.

La fuerte inserción de los grupos armados en la vida local e intracomunitaria permite que el empleo de la violencia contra la población civil sea un recurso efectivo para ganar ventajas sobre su rival: en el caso de la confrontación ELN-Farc, la violencia se enfocó en atacar a los territo-

rios donde se presumía la existencia de organizaciones sociales y civiles colaboradores o cercanos a una u otra guerrilla.

Lo anterior trajo como consecuencia una fuerte degradación y elevados perjuicios a la población civil. En palabras de Ávila, “Los corredores utilizados por estos grupos, que eran tradicionales para las comunidades en su diario transitar, fueron sembrados por minas a medida que la guerra entre las guerrillas se incrementaba (...) La consecuencia fue el aumento inmediato de los accidentes con artefactos explosivos” (2010: 20). Así mismo, los asesinatos selectivos y las masacres cometidas por ambas agrupaciones armadas sobre pobladores y miembros de organizaciones sociales a las que acusaban mutuamente de ser sus bases sociales, agudizaron la violencia contra los civiles. Ejemplo de lo anterior fueron las matanzas de Arauquita, cometidas por el ELN en diciembre de 2008, cuando murieron diez personas (Alarcón, 2008, 26 de diciembre), y los asesinatos de campesinos denunciados por la Asociación Campesina de Arauca²³.

Otra evidencia del impacto sobre la población civil que ha tenido la confrontación Farc-ELN es el desplazamiento de población. Según un funcionario estatal conocedor del tema del desplazamiento forzado en la región (Entrevista 5), el fenómeno del desplazamiento tuvo dos responsables: durante los primeros años de su ocurrencia y aproximadamente hasta 2001 fue producto de las tomas guerrilleras, y posteriormente fue provocado por la acción de los grupos paramilitares. De acuerdo con la misma fuente, a partir de la desmovilización del Bloque Vencedores de Arauca, en diciembre de 2005, las promotoras de desplazamiento han sido nuevamente las guerrillas, en esta ocasión por cuenta de la guerra entre las Farc y el ELN (Entrevista 5).

A las atribuciones hechas por el entrevistado se deben añadir otros dos factores explicativos. Uno de ellos fueron los desplazamientos ocasionados por las fumigaciones de cultivos de uso ilícito, los cuales deben ser tenidos en cuenta pese a que su impacto es marginal sobre la cifra total de desplazados. El otro hace referencia a las acciones de las fuerzas estatales, cuya ofensiva contribuyó al aumento del desplazamiento debido al temor que despertaron por los combates mantenidos con la insurgencia en zonas pobladas y por la acción indiscriminada de la fuerza pública sobre la población civil. El fenómeno no cambia su tendencia con la desmovilización paramilitar, en parte porque los grupos insur-

²³ La ACA denuncia asesinato de campesinos por parte del ELN en Arauca. Ver denuncia en: <http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article3175>.

gentes adoptan el desplazamiento forzado como un recurso de guerra para enfrentarse entre sí; de esa manera, en el año 2007 provocaron el mayor desplazamiento en la historia de la región, como se comprueba en el Gráfico 10.

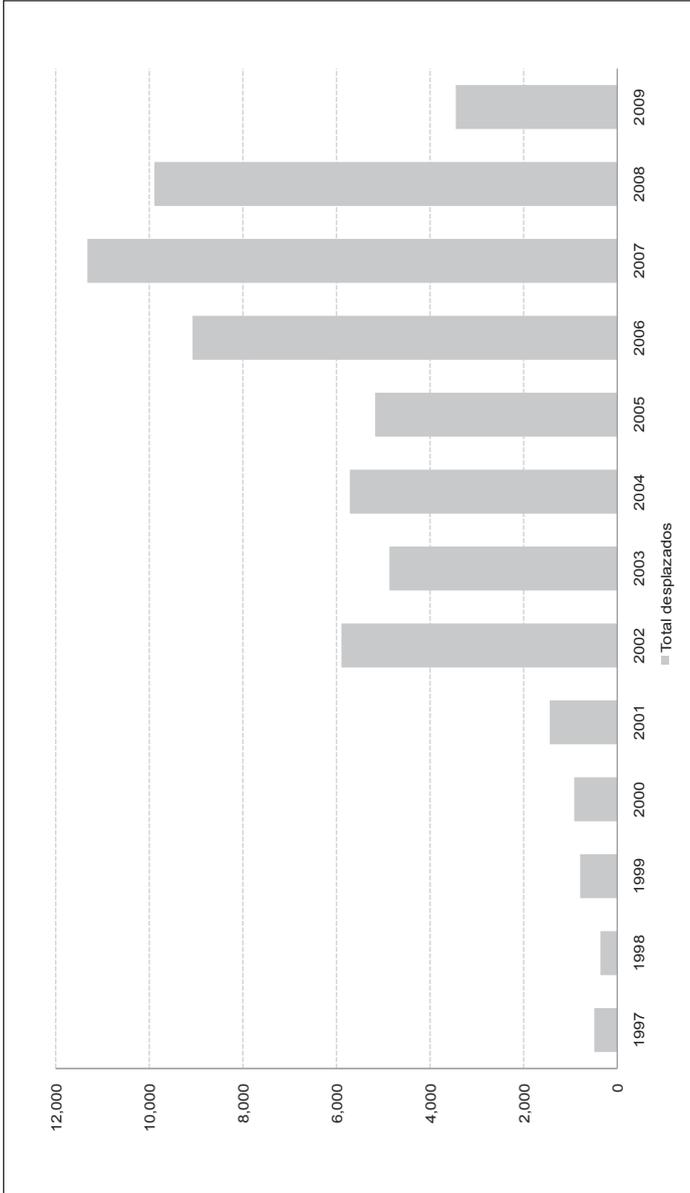
La incidencia del ELN en el desplazamiento ocurre en el marco de la guerra que sostiene con las Farc desde el año 2006, y aunque se sabe que ambos grupos insurgentes lo promueven, no es posible establecer qué participación tiene cada uno en la totalidad del mismo. Sin embargo, es posible afirmar que el ELN ha utilizado el desplazamiento forzado como una estrategia de guerra contra las Farc, situación de la que dan cuenta varios episodios puntuales. Por ejemplo, fuentes consultadas en el terreno manifestaron tener conocimiento de que el ELN había llegado a la vereda Botalón y, con lista en mano, ordenado la expulsión de ciertos pobladores (Entrevista 6). En relación con este episodio, la fuente comenta que las Farc y el ELN emplean un *modus operandi* distinto para desplazar, pues mientras los primeros asesinan para infundir temor y provocar el desplazamiento, los segundos amenazan y “dan la oportunidad” de huir antes de actuar (Entrevista 6).

Ahora bien, el segundo proceso que implicó la perturbación de la hegemonía del ELN tiene que ver con el posible efecto que, como producto de su desalojo paulatino del ámbito político, ha tenido la pérdida de fuentes de financiamiento en su relación con el narcotráfico.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), a 31 de diciembre de 2009 había en Arauca 417 hectáreas sembradas con coca. La mayor concentración de esos cultivos se encuentra en el municipio de Arauquita, que en el año 2009 tenía sembradas de esa planta doscientas hectáreas (48,0% de los cultivos del departamento) (Simci, 2010: 34). Geográficamente, esos cultivos están más concentrados en la zona occidental del municipio, y debe anotarse que en la franja fronteriza con Venezuela no hay presencia de ellos.

El municipio que sigue a Arauquita en área de cultivos de uso ilícito es Tame, que en el año 2009 tenía ciento tres hectáreas sembradas, lo cual representaba el 24,7% de los cultivos del departamento. Tales siembras están concentradas principalmente en el borde nororiental, en límites con Arauquita. A Tame le sigue Fortul, con setenta y dos hectáreas; luego viene Saravena, con treinta y cuatro hectáreas, y finalmente está Puerto Rondón, con ocho hectáreas de cultivos de coca (Simci, 2010: 34). Sobre la ubicación hay que anotar que en el caso de Fortul

Gráfico 10
Desplazamiento forzado en Arauca, 1997-2009



Fuente: Sipod. Datos procesados por el Cerac.

y de Puerto Rondón los cultivos se concentran en los límites de estos municipios con Arauquita. Llama la atención el hecho de que entre 2001 y 2009 el municipio de Arauquita siempre presentó la mayor concentración de cultivos (Simci, 2010: 35).

En este análisis se estima que el ELN puede estar involucrándose gradualmente en el narcotráfico. El primer indicio destacable es que la presencia del ELN en la región, y específicamente del Frente Domingo Laín y la compañía Simacota, ocurre en la misma zona donde hay mayor concentración de cultivos: la franja occidental del municipio de Arauquita. Así mismo hay que anotar que el ELN tiene control sobre el corredor que va de la vereda Botalón hasta Puerto Lleras (Entrevista 7), en la frontera con Venezuela. Este corredor queda sobre la zona de cultivos y es utilizado para entrar pertrechos y sacar droga.

La coincidencia geográfica entre las actividades del narcotráfico y la presencia del ELN sugiere que existe un vínculo entre dicha organización insurgente y tal actividad. Oficialmente el ELN ha planteado en sus congresos que no se involucrará en actividades de comercialización o producción de droga, pero que esta actividad sí es susceptible de estar sujeta a la exigencia de pagos forzosos, como cualquier otra actividad económica lucrativa (Entrevista 1). Dado lo anterior, y teniendo en cuenta información recogida en trabajo de campo, es posible afirmar que el ELN, por lo menos, tiene como fuente de financiación el narcotráfico en forma de cobro de “gramaje”, un impuesto sobre la producción de coca. Otra fuente, la Sijin de Arauca, señala que el ELN “podría estar manejando alrededor del 20% del narcotráfico en el departamento, mientras que el otro 80% estaría a cargo de las Farc” (citada por Reyes Posada, 2009: 315).

Pese a que no existe evidencia para analizar si el ELN está comprometido en la producción, una hipótesis verosímil es que se ha involucrado por lo menos en la fase de comercialización del negocio del narcotráfico, operación que en Arauca consiste en extraer la droga de los sitios donde se produce hasta territorio venezolano. Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que, a través del corredor Botalón-Puerto Lleras, se transporta droga de Arauca hacia Venezuela y, como se dijo, este corredor es controlado por el ELN. El otro hecho que se utiliza para inferir la hipótesis planteada es que la mayoría de las zonas de disputa armada con las Farc (Arauquita y Tame) coinciden con las zonas de cultivos.

La concentración geográfica de la disputa Farc-ELN en la zona del corredor durante 2008 (como se ve en el Mapa 10²⁴) sugiere que uno de los factores explicativos de la guerra entre las dos organizaciones insurgentes radica en el control de un territorio propicio para transportar cocaína de Colombia hacia Venezuela, como parte de su proceso de comercialización. Si se considera lo anterior, tiene mucho sentido pensar que el ELN está involucrado en actividades de comercialización de cocaína, porque ello explicaría el conflicto de intereses que motiva parcialmente la guerra entre las dos guerrillas.

Ahora bien, de acuerdo con la Cnai (Núñez, 2010: 66), el ELN ha sido renuente a ingresar de lleno en el negocio del narcotráfico en este departamento, al contrario de lo que sucede en Nariño o en otras regiones. Evidencia de esto es la disminución que tuvieron los cultivos ilícitos una vez desmovilizadas las estructuras paramilitares de la región. Sin embargo, como hemos resaltado en este capítulo, la pérdida de fuentes de financiamiento, como la extorsión a las petroleras o la captura de dineros del erario público, puede conducir a esa agrupación a sustituir tales acopios por las rentas derivadas del narcotráfico y de esa manera involucrarse en las diferentes fases de la cadena productiva de este negocio ilícito.

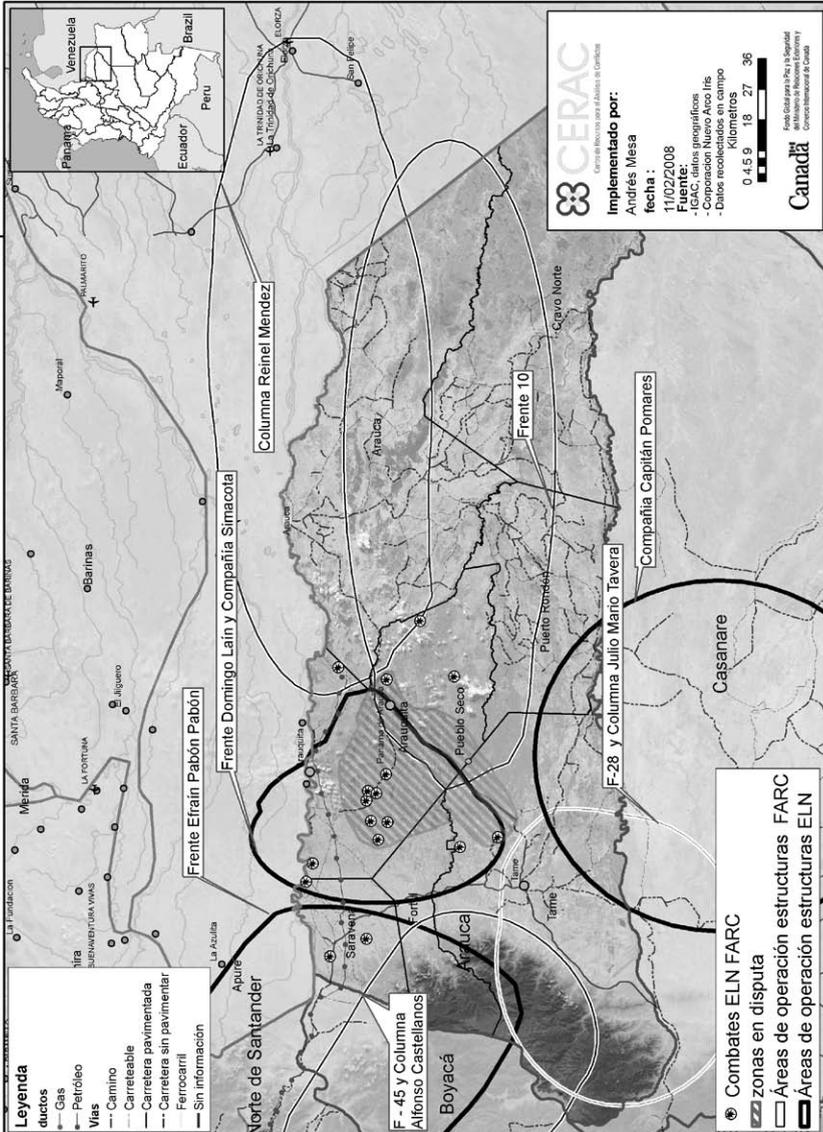
A este argumento habría que agregar la relación de las Farc con los cultivos ilícitos y el efecto que esto tiene sobre la población. Ávila, González y Gutiérrez (2008) indican al respecto:

“... a medida que los cultivos de uso ilícito se expandieron en el departamento, las Farc asumieron su regulación y fueron ganando rápidamente aceptabilidad en la población. Por el contrario el ELN, renuente a ingresar a las lógicas del narcotráfico, vio perder aceleradamente gran parte del control territorial. Así, a medida que las Farc crecían se fueron expandiendo a los territorios del ELN, con lo cual las disputas comenzaron”.

Es decir, el ELN, por ser renuente a participar de lleno en el narcotráfico, está perdiendo control territorial y poblacional, lo que incrementa la pérdida de regulación política y de reconocimiento como autoridad local en la región. Ese factor constituiría un argumento más para pensar

²⁴ Este mapa presenta áreas de operación y disputa aproximadas. Fue elaborado manualmente a partir de información recogida en campo en 2008 y consultando las notas magnéticas de la base de datos sobre conflicto armado colombiano del Cerac.

Mapa 1
 Áreas de operación y zonas de disputa
 en 2008 entre las Farc y el ELN



que la desaparición de la hegemonía del ELN ha originado su involucramiento, así sea parcial, con el narcotráfico.

Moldear el barro para garantizar la paz

El ELN es en Arauca un gigante con pies de barro. Esto quiere decir que, a pesar de su presencia histórica y de su persistencia en la acción militar, resultó vulnerado, no en su capacidad operativa sino en su capacidad política. Y es precisamente esa capacidad política la que ha sido moldeada violentamente y de la que en este trabajo se sugiere que puede ser recuperada desde una perspectiva de construcción de paz. La construcción de “poder popular” y su fortalecimiento político en Arauca puede ser un aliciente para que opte por una solución negociada, pues el ELN no querrá desaprovechar las victorias políticas que ha obtenido.

Del análisis realizado sobre la participación del ELN queremos destacar lo siguiente. En primer lugar, que esa agrupación, a pesar de haber perdido fortaleza operativa, tiende a mantener intactas sus estructuras y su capacidad de hacer daño, como lo demostró en 2008 y en la confrontación con las Farc. No obstante, la derrota del ELN no está en ese ámbito sino en el político, y, como se ha resaltado en este capítulo, la producción de violencia por parte del ELN estaría vinculada a la pérdida de su hegemonía política.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la construcción de estrategias que den fin al conflicto con el ELN en Arauca es que la configuración del poder local en esa región ha funcionado a través de alianzas con grupos armados no estatales. Es decir, Arauca experimenta un proceso de institucionalización de la violencia como forma de resolución de conflictos locales y de construcción de poder local y regional. Esto, sumado al papel del Estado central, que no ha desarrollado una integración por la vía de la optimización de las condiciones de vida de la población, sino que, por el contrario, ha enfocado sus acciones en garantizar la explotación del petróleo y en mantener el orden público –algunas veces mediante el empleo de la fuerza desmedida sobre la población civil–, crea condiciones que perpetúan la existencia del ELN en ese territorio.

En tal sentido se sugiere la necesidad de disponer de instituciones *ad hoc* que puedan fungir como escenario de transición para la consolidación institucional del gobierno local, con el objetivo de minar la

capacidad de la intermediación armada en los asuntos públicos y las alianzas de políticos y funcionarios con grupos armados que tergiversan la función territorial del Estado. Ese sería un paso fundamental para la reducción de la violencia.

De otro lado, los esfuerzos de movilización que se han desplegado en Arauca en busca de humanizar la guerra y minimizar su impacto sobre la población civil constituyen una ventana de oportunidad que los interesados en terminar el conflicto con el ELN no deben desperdiciar. El ELN mantiene vasos comunicantes con la población que ha construido en años de intermediación política y social, lo que viabiliza la posibilidad de delegar a las estructuras sociales locales la mediación de un posible diálogo entre la insurgencia y el Estado.

Finalmente, las actuales relaciones conflictivas entre el ELN y las Farc obstaculizan cualquier intento de una paz negociada con el ELN, porque las Farc pueden constituirse en un *spoiler* que dificultaría un proceso de paz parcial con aquél y además haría inviable una propuesta de concentración en Arauca. Esto es clave, pues mientras exista esa amenaza los combatientes del ELN no van a abandonar los medios de defenderse. A pesar de los comunicados expedidos por ambas organizaciones para anunciar el fin de su enfrentamiento, éste sigue siendo una amenaza latente. En este sentido, es fundamental que un escenario de terminación del conflicto brinde las garantías necesarias para los futuros ex combatientes del ELN. Esto es aún más relevante en Arauca, donde, como se ha señalado, el recurso de la violencia para la tramitación de conflictos está institucionalizado.

Norte de Santander: debilitamiento militar relativo y subordinación del ELN

Norte de Santander es un departamento que por sus condiciones geográficas es estratégico en la dinámica de la guerra. Su frontera oriental con Venezuela permite el transporte de drogas ilícitas para su comercialización y además ofrece un escenario de aprovisionamiento y descanso a las organizaciones armadas no estatales (Ávila, 2010: 2). Al occidente, la frontera interna con el sur del Cesar y el departamento de Santander constituye un corredor estratégico que une a ese departamento con el norte y el centro del país.

La región se caracteriza por presentar un desarrollo desigual. De un lado, el centro del departamento se apoya en su condición de frontera y dinamiza la economía de servicios (comerciales, bancarios, transporte); el principal municipio de este territorio es Cúcuta, cuya condición de ciudad fronteriza la convierte en el eje principal de las transacciones comerciales de todo el departamento. De otro lado, la subregión selvática, conocida como el Catatumbo²⁵, se caracteriza por una alta disponibilidad de recursos naturales que permiten el desarrollo de economías extractivas, tanto minerales como agroforestales. Sumado a lo anterior, con la introducción de la planta de coca, desde principios de los años noventa se ha convertido en un enclave cocalero. A pesar de la alta disponibilidad de recursos naturales, en particular minero-energéticos, esta región ha soportado la ausencia de la institucionalidad estatal y procesos de colonización sin regulaciones, producto de las economías extractivas y la violencia.

Las labores extractivas, así como las ligadas al narcotráfico, han constituido ejes centrales de disputa, y no solo la suscitada entre grupos ilegales; ha sido asimismo fuente de conflictos sociales relacionados con los modelos de desarrollo regional que diferentes sectores sociales y grupos armados pretenden aplicar e imponer en la región.

La situación descrita es fundamental para entender el carácter de las relaciones entre los grupos armados, el Estado y la población civil. El desarrollo de economías de enclave no estuvo ligado a un fortalecimiento institucional que integrara, por la vía de la inversión social y el desarrollo económico regional, a los pobladores de subregiones como el Catatumbo. Esto tuvo como correlato dos procesos: la inclusión creciente de los campesinos a la economía cocalera regional y la participación de los grupos armados no estatales (guerrillas y paramilitares) en el negocio del narcotráfico y en el aprovechamiento bélico y económico de recursos legales como el petróleo.

Teniendo en cuenta lo anterior, dos conflictos sociales pueden ser desencadenantes de nuevas expresiones violentas en la región. El primer conflicto, que viene de antaño pero se visibiliza gracias a las movilizaciones de los campesinos²⁶ (Comité Permanente de Refugio Humanita-

²⁵ Para efectos de este documento, la subregión del Catatumbo comprende los siguientes municipios: El Carmen, Convención, Teorema, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata y Hacarí.

²⁶ El 4 de noviembre de 2010, campesinos de la región del Catatumbo se tomaron las alcaldías de Teorama, El Tarra y Convención, con el objetivo de reactivar las Audiencias Populares y la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) como espacios legítimos del cam-

rio de la Región del Catatumbo, 2010, 3 de noviembre), es el tratamiento que el Estado da al problema de los cultivos ilícitos. El segundo conflicto está relacionado con las diversas formas de abordar y aprovechar el nuevo auge minero en la región que tienen pobladores, grupos armados no estatales y el Estado. En ambos conflictos puede producirse violencia, ya sea por la intermediación armada que efectúa la guerrilla, por el aprovechamiento de la oferta de violencia –por ejemplo, la ofrecida por los neoparamilitares– que hacen sectores políticos y económicos, o por el tratamiento coercitivo que el Estado pueda darles.

Nuestro análisis tiene en cuenta este contexto porque en él los diferentes grupos armados, no estatales y estatales, han superado la capacidad bélica y operativa del ELN y evidenciado su debilitamiento militar y su subordinación a otros grupos armados. Para entender cómo ocurren esos procesos se realiza un primer acercamiento al contexto general del conflicto en la región, haciendo énfasis en la relación que esta expresión armada tiene con los conflictos sociales y económicos descritos atrás; posteriormente se desarrollan las implicaciones que este contexto ha tenido en la conducta del ELN.

Antagonismos regionales armados

La dinámica del conflicto armado en Norte de Santander se puede abordar identificando tres etapas. La primera se caracteriza por la inserción de las guerrillas a principios de la década de los ochenta. La ausencia estatal y el desarrollo desigual forjaron las condiciones propicias para que las guerrillas –y principalmente el ELN– surgieran en el territorio. Una segunda etapa (1997-2004), que podríamos denominar de disputa armada y consolidación paramilitar, se caracteriza por la presencia importante de cultivos ilícitos en la región y por la victimización a la población civil que desencadena la incursión del paramilitarismo. Como señalan González, Bolívar y Vásquez,

pesinado para la construcción del plan piloto de sustitución de cultivos, el diagnóstico, apoyo y ejecución del plan de desarrollo propio y el impulso de la zona de reserva campesina como estrategia de defensa y permanencia en el territorio de las familias campesinas. Véase: Comunicado del Catatumbo sobre plantón en Gobernación de Norte de Santander. Disponible en: http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=156:planton-campesino-en-gobernacion-de-n-santander&catid=10:catatumbo&Itemid=14

“Los grupos paramilitares habían iniciado desde 1996 y 1997 una ofensiva para cercar, disminuir y neutralizar los corredores tradicionales de la guerrilla en el Urabá y nororiente del país. En estas regiones los paramilitares prácticamente han relevado al ejército y a la policía en su función de enfrentar la guerra contrainsurgente. Allí se desarrolla, en conclusión, una disputa entre los actores armados por el corredor geográfico que comprende las regiones de Urabá, Nudo de Paramillo, nordeste antioqueño, bajo Cauca, Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur del Cesar y más recientemente la región del Catatumbo” (2003: 117).

En esta etapa, 1997-2004, se procesa una integración más firme de las Farc a la región y el proyecto paramilitar entra a disputar las zonas estratégicas con las guerrillas y consolida su proyecto regional. Una tercera etapa (2005-2010) se caracteriza por la desmovilización del Bloque Catatumbo de las autodefensas, la ofensiva estatal y la emergencia de neoparamilitares en la región. Esta etapa se ha denominado de reordenamiento y disputa por el control territorial (Codhes, 2007).

Para efectos del análisis nos centraremos en las dos últimas etapas identificadas y haremos énfasis en las características de la guerra en la subregión del Catatumbo, toda vez que en ella se han concentrado los niveles más altos de violencia y allí es dable observar el relativo debilitamiento militar del ELN y la subordinación a otros grupos armados, específicamente a las Farc.

En el territorio del Catatumbo aparecen todos los grupos armados no estatales. Es una de las zonas de retaguardia del ELN, en particular del Frente de Guerra Oriental²⁷ (FGO), que ha operado también en Santander, Casanare, Arauca y el nororiente de Boyacá (Villamarín, 1995: 15). Actualmente tiene influencia en el Catatumbo el Frente “Camilo Torres”, cuyo centro operacional está ubicado en la serranía de Perijá, en el departamento del Cesar, al norte del Catatumbo. Allí también opera el Frente “Carlos Armando Cagua Guerrero”, conformado entre 1983 y 1986 como parte de la expansión del FGO. De igual manera, en la zona norte del departamento se identificó la presencia de las compañías “Héroes del Catatumbo”, “Colectivo Héctor” y “Comandante Diego” (Bdcac-Cerac).

²⁷ Cada frente de guerra tiene tres áreas, de las cuales “el área de retaguardia es la tercera [...] y es el respaldo de las otras dos: el área de confrontación y consolidación, que se entiende como una zona intermedia, con flujo inestable de la guerrilla, y el área de recuperación y apertura” (Aguilera, 2006: 230).

En la zona del Catatumbo operan asimismo, desde 1982, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por medio del Frente 33²⁸, que en 1999 aumentó su operatividad de manera importante, llegando a moverse desde el Catatumbo hasta Cucutilla (Entrevista 8). Fuentes consultadas señalaron que actualmente su capacidad de desplazamiento se ha restringido, pues solo opera en la zona norte del municipio de Sardinata, y en general en el bajo Catatumbo. El Frente 41 de las Farc también ejerce influencia en la subregión, aunque, al igual que el “Camilo Torres” del ELN, tiene su centro de operaciones en la serranía de Perijá. En la región actúa también la columna móvil “Resistencia del Bari”.

En cuanto a la presencia de neoparamilitares²⁹ en el Catatumbo, información recogida en trabajo de campo permite afirmar que las “Águilas Negras” y Los Rastrojos operan en los municipios de El Tarra y Tibú, e Indepaz añade que estos grupos aparecen también en Convención (Indepaz, 2010).

En el Gráfico 11 pueden notarse los altos niveles de violencia de conflicto en Norte de Santander en el período 1988-2010 (junio). Así mismo es posible observar que en ese contexto de violencia constante, los niveles máximos se alcanzaron en 1993, 2002 y 2008.

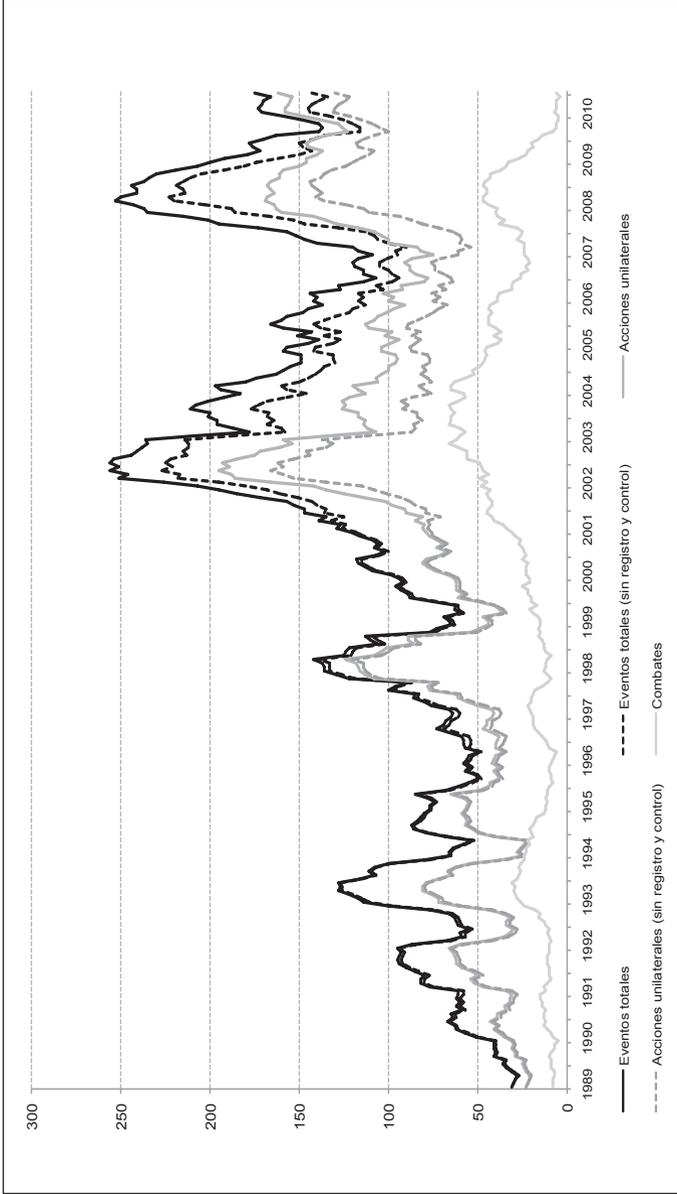
El máximo global en la serie de 2002 corresponde a la segunda etapa identificada, es decir, al lapso de disputa armada y consolidación paramilitar. El máximo del 2002 está asociado con la entrada de los paramilitares a Norte de Santander, iniciada en 1999 con la estructura que se denominó Bloque Catatumbo³⁰, y que se ubicó en el municipio de Tibú, con su centro de operaciones en el corregimiento de La Gabarra. El aumento especialmente significativo entre mediados de 2001 y 2002, como se constata en el Gráfico 13, se explica por la violencia ejercida por los paramilitares durante su incursión en la región y la reacción del ELN ante la misma, ya que este grupo fue el más afectado por la violencia paramilitar.

²⁸ Sobre este frente vale la pena anotar que fue creado en un principio como una estructura financiera, pero con el paso del tiempo sus funciones se expandieron a otras áreas de la guerra.

²⁹ Los grupos neoparamilitares son las estructuras armadas que emergieron luego del proceso de DDR de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dado que poseen ciertos rasgos que permiten establecer relaciones de continuidad con el fenómeno del paramilitarismo (en lo que tiene que ver con su forma de organización, con los territorios donde hacen presencia, como también con algunos de sus objetivos), analíticamente se les denomina “neo-paramilitares”. Algunas de las estructuras neoparamilitares son: Las Águilas Negras, Los Machos, Los Rastrojos, Los Urabeños, Erpac (Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia), Renacer, Alta Guajira y Los Paisas.

³⁰ Esta estructura estaba dividida en el Frente La Gabarra y el Bloque Móvil Catatumbo.

Gráfico 11
Eventos de conflicto en Norte de Santander, 1988-junio 2010



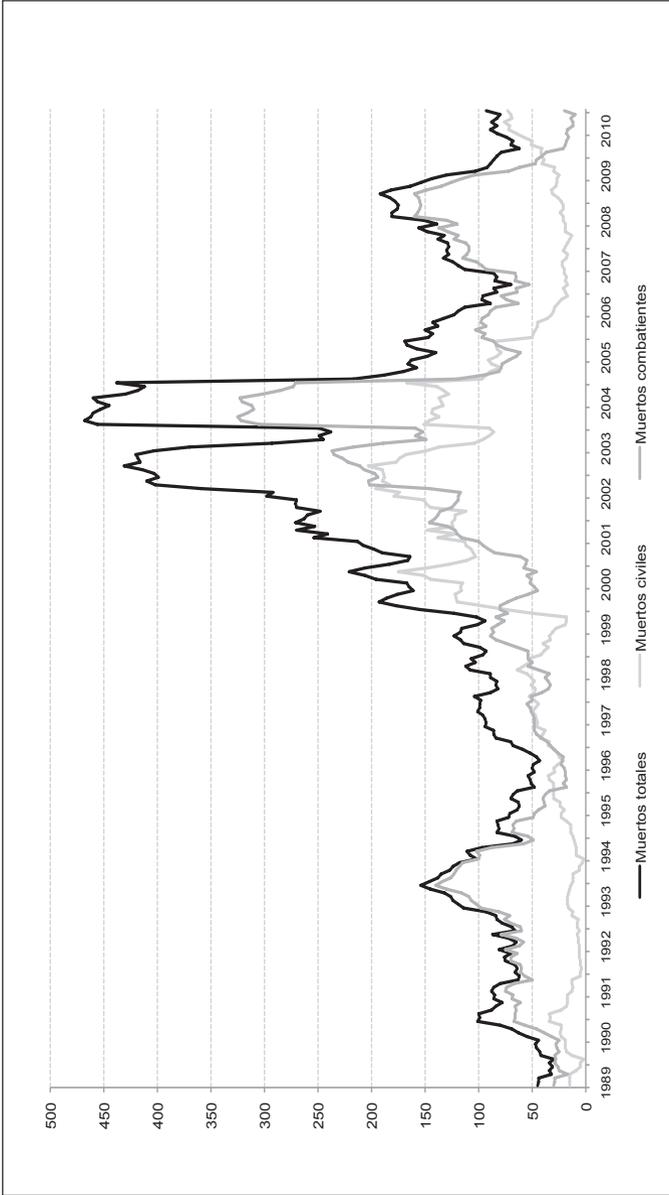
Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

La ofensiva paramilitar tuvo múltiples objetivos. Uno militar, que pretendía ocupar las zonas que controlaban los grupos insurgentes e impedir su expansión, se inició en la subregión del Catatumbo, donde los paramilitares establecieron su control principalmente en las zonas planas y ricas, “como son los municipios de Tibú, El Zulia, Sardinata y Cúcuta, las áreas más propicias y de mayor potencial para el desarrollo agroindustrial y el establecimiento de la gran propiedad” (Pérez González, 2006: 7), además de contar con la existencia de recursos mineros como el carbón y los hidrocarburos.

La incursión paramilitar y la violencia altamente letal que ejercieron durante esta causaron un repliegue de las guerrillas a sus zonas de retaguardia, como El Tarra, San Calixto, Hacaré y el norte de los municipios de Teorama, Convención y El Carmen. Estos territorios, en contraste con aquellos donde el paramilitarismo logró hacerse a un control hegemónico, se caracterizan por ofrecer condiciones que no favorecen la inversión en agricultura de alta productividad y, en este sentido, la opción de los campesinos se ha dirigido a la siembra de coca como alternativa de subsistencia, y para los grupos armados como medio de financiación (Pérez, 2006: 7). Durante los años de disputa entre guerrillas y paramilitares por el dominio del territorio se llevaron a cabo acciones que afectaron crecientemente a la población civil nortesantandereana. Como puede observarse en el Gráfico 12, los más altos registros de muertes asociadas al conflicto se presentan entre 1999 y 2005, período en el cual la cantidad de muertos civiles es superior a la de cualquier otro momento de la serie y alcanza un máximo histórico en 2003, superando incluso la de los muertos combatientes. Esto se explica por el empleo de violencia indiscriminada contra la población civil por parte de los paramilitares, como forma de debilitar el apoyo popular insurgente en la región. Por ejemplo, a los paramilitares se atribuye la responsabilidad de casi todas las 5.200 muertes ocurridas entre 1999 y 2004 en La Gabarra (Valencia, C., 2007, 30 de septiembre). En sentencia reciente dictada en el marco del proceso de Justicia y Paz, a alias ‘Iguano’, comandante paramilitar del Bloque Catatumbo, se le atribuyen 170 asesinatos (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2010: 87).

Con la consolidación del paramilitarismo se refuerza también un proyecto político y económico de dominación regional. En el caso de la subregión del Catatumbo, la ofensiva paramilitar consistió en “liberar” de guerrillas y de sus bases, mediante la guerra, amplias zonas e implantar un proceso de concentración de la tierra, centrado en la apropiación

Gráfico 12
Muertos totales, civiles y combatientes, 1988-2010



Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

de las tierras con mejor disponibilidad para el desarrollo de proyectos minero-energéticos y agroindustriales, así como para la apertura de amplias extensiones de cultivos de uso ilícito. Este modelo afianzó todavía más el desarrollo desigual del departamento mediante la violencia y reconfiguró la economía campesina. Como se ha planteado, en Norte de Santander hay un tipo de relación entre la lógica de la expansión territorial de los actores armados y la confrontación entre modelos de desarrollo rural (Pérez, 2006: 22).

La segunda etapa, que Codhes (2007) denominó acertadamente de reordenamiento y disputa por el control territorial, abarca los años 2005-2010. Como aparece en el Gráfico 11, en este lapso hay una tendencia a la disminución de eventos de conflicto desde el año 2003, lo que está relacionado, de un lado, con la contundencia de los golpes de los paramilitares y de las fuerzas estatales a las estructuras del ELN –las cuales redujeron su actividad desde 2002, hasta caer a mínimos históricos en 2005 (Gráfico 13)– y, de otro lado, con la desmovilización de las estructuras paramilitares del Bloque Catatumbo en diciembre de 2004. Ante la retirada de las AUC y la arremetida del Ejército Nacional, las guerrillas, en particular el ELN, han optado por consolidar su dominio y construir su retaguardia sobre las zonas más selváticas del departamento (tanto en el Catatumbo como en la entrada al Sarare).

A pesar de la tendencia a la disminución, en los años 2007-2009 se presenta un incremento importante de eventos de conflicto (Gráfico 11). Este aumento está asociado a la ofensiva estatal y a la actividad del ELN en el marco de la ruptura de negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en 2007. Como señala el Gráfico 12, tales años se caracterizaron por presentar un número significativo de combatientes muertos, lo que sugiere que la guerra se desarrolló por medio de acciones de las fuerzas estatales contra los grupos armados, y viceversa, lo cual redujo de manera importante la afectación de la población civil.

Debilitamiento militar relativo

En esta sección se quiere resaltar que el ELN está en una situación de debilitamiento militar relativo. Es decir, el mismo se debe más al crecimiento del pie de fuerza y la mejor dotación de otros grupos armados, que al debilitamiento del ELN propiamente dicho. A pesar de ello, la agrupación puede verse abocada a intermediar en los conflictos sociales

a través del uso de la violencia, en particular en el tratamiento coercitivo del Estado contra la siembra de cultivos de uso ilícito y en la discusión sobre la forma de abordar un nuevo ciclo de economía extractiva, esta vez basado en la minería. Esto puede explicar la persistencia de su actividad en la región.

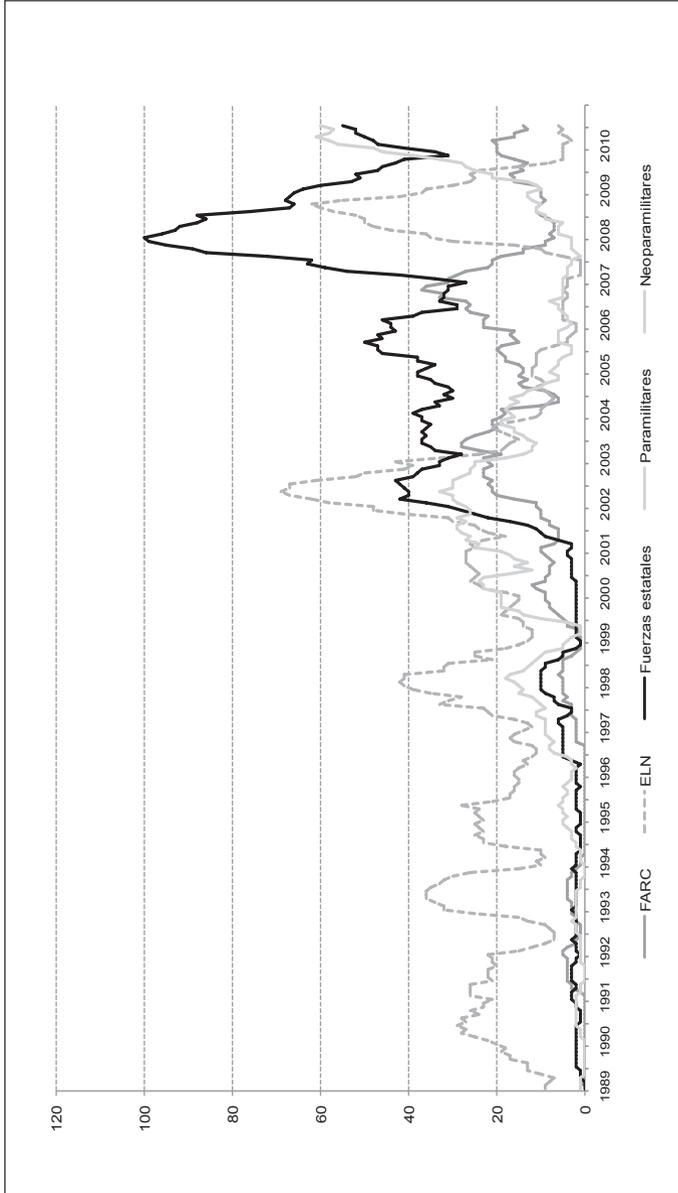
En el Gráfico 13 se presentan las acciones unilaterales registradas en Norte de Santander en el período 1988-2010, discriminadas por grupos responsable. Al igual que en Arauca, el ELN de Norte de Santander tiene una presencia histórica de fuerte vinculación con la población civil, se beneficia económicamente del paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas por ese territorio y mantuvo una actividad importante hasta la incursión violenta del paramilitarismo en la región.

Los datos consignados en el Gráfico 13 permiten afirmar que la participación del ELN en el conflicto armado de Norte de Santander ha sido protagónica durante casi toda la serie, y que esa agrupación es el actor que influyó de manera más importante en la dinámica del conflicto hasta el año 2003, momento a partir del cual las fuerzas estatales son las que marcan la dinámica. La importancia del ELN dentro del conflicto armado regional, medida cuantitativamente, es consistente con el hecho de que la región, y en especial el Catatumbo, es un bastión histórico de esa agrupación insurgente. Como se indicó en el primer capítulo de este libro, en el período 2008-2010 Norte de Santander constituye el escenario de mayores eventos de conflicto con participación del ELN en el país, y el segundo, después de Arauca, con más acciones ofensivas en el mismo lapso.

En el Gráfico 13 se observa que 2002 y 2007 constituyen los momentos de mayor número de acciones unilaterales perpetradas por el ELN. El primer máximo está asociado a la estrategia nacional de esta organización insurgente dirigida a presionar a favor de la instalación de una zona de despeje en el sur de Bolívar, objetivo que a la postre se vería frustrado. De otra parte, el máximo que se inicia en 2007 y va hasta 2008 está relacionado con la estrategia 'elena' dirigida a visibilizar su capacidad de daño tras las fallidas negociaciones con el gobierno de Uribe Vélez.

Lo anterior indica que en Norte de Santander el ELN solo tiene capacidad de reacción en momentos cuando es necesario visibilizar su capacidad de daño para presionar procesos de negociación con el gobierno. Como muestra el Gráfico 13, a pesar de la fuerte fluctuación registrada en 2007, desde mediados de 2002 el nivel promedio de las acciones

Gráfico 13
Acciones unilaterales, por grupo responsable, 1988-2010



Fuente: Cerac. Base de datos sobre conflicto armado colombiano, V. 11, 1. Fecha de corte: junio de 2010. Información sujeta a revisiones y actualizaciones.

unilaterales del ELN es notablemente inferior al registrado durante la década del noventa. La tendencia a la menor participación ‘elena’ en la violencia de conflicto de los últimos años de la serie obedece en buena medida al debilitamiento militar relativo que ha experimentado la organización en los últimos años, y a la pérdida de iniciativa militar en la región, que en el pasado reciente se ha circunscrito a acciones de presión y visibilización en la escala nacional.

Otro hallazgo destacado se refiere a que, para el final de la serie, son los grupos neoparamilitares y las fuerzas estatales quienes han incrementado el número de sus acciones unilaterales, por encima inclusive de las Farc y, por supuesto, del ELN. En últimas, este último no pudo adaptar su aparato militar a los retos bélicos que plantearon los paramilitares y las fuerzas estatales

Subordinación militar y narcotráfico

La situación de debilitamiento militar relativo del ELN en la región lo ha llevado a un proceso de construcción de alianzas con las Farc. Así, han empezado a operar conjuntamente (*Revista Insurrección*, 2008, 9 de abril)³¹ en todo el departamento, y en el caso del Catatumbo han hecho un pacto para defender juntos la subregión. Dicho pacto consiste en que los dos primeros anillos de seguridad para el resguardo del territorio son de responsabilidad de las Farc, que tiene mayor fuerza militar, y el último es responsabilidad del ELN. Este hecho señala que el ELN ha tenido que subordinarse militarmente a las Farc y que su dispositivo regional se ha quedado corto frente a los nuevos desafíos de la guerra, pues otrora no necesitaban de ningún apoyo para controlar el Catatumbo.

Esta subordinación militar a las Farc hace verosímil la hipótesis de que el ELN se ha involucrado en el negocio del narcotráfico en la región. Puede aventurarse la suposición de que tal supeditación militar impone al ELN estar asociado con la economía del narcotráfico, en una o en varias de sus fases, y que, dado su debilitamiento militar relativo, ella se convierte en un imperativo para no provocar repercusiones violentas por parte de las Farc sobre los integrantes de las estructuras militares del ELN o sus bases sociales.

³¹ En diversos partes de guerra, entre los cuales está el citado, se mencionan “acciones de unidades conjuntas” de Farc y ELN en Norte de Santander.

Si bien se resalta que la inserción del ELN en la economía del narcotráfico en la región no estaba relacionada en un principio con una conducta de depredación de rentas y que, por el contrario, durante mucho tiempo el ELN estuvo reticente a ese tipo de vinculación, la inserción del campesinado en la siembra de coca, como forma de sobrevivencia, impulsó al grupo armado a actuar como regulador del mercado. Por el contrario, la implantación de las Farc y los paramilitares estuvo directamente asociada a la depredación de rentas y a la vinculación con narcotraficantes (Reyes Posada, 2009, 310).

El censo del Simci correspondiente a 2009 muestra que un grupo de 17 de los 41 municipios de Norte de Santander habían sido afectados por cultivos de coca en el período 2001-2009 (Simci, 2009: 85). Las localidades con mayor participación son El Tarra, Teorama, Sardinata y Tibú. Según el censo del año 2009, el 55% de la coca sembrada en el departamento se localiza en los municipios de Teorama y Tibú” (Simci, 2009: 85).

Lo primero que llama la atención en la información divulgada por el Simci es que la totalidad de los cultivos de uso ilícito de Norte de Santander se ubica en la subregión del Catatumbo. Este dato debe valorarse para vislumbrar las perspectivas de paz en la región. Teniendo eso en cuenta, uno de los hechos que hacen verosímil la hipótesis esbozada anteriormente es que las zonas de influencia de algunas de sus estructuras coinciden con la ubicación de cultivos de uso ilícito, y su alianza con las Farc en terrenos operativos hace creíble que hayan hecho acuerdos en otros asuntos, además del militar. Es conocido que las Farc están involucradas de lleno en el negocio del narcotráfico, y si hay relaciones armoniosas entre las dos guerrillas, en la zona existen condiciones para que se hayan aliado en este negocio. Por último, los neoparamilitares de la región, que se caracterizan por su baja confrontación antisubversiva y que tienen como principal tarea el negocio del narcotráfico, al parecer han establecido pactos tácitos con las guerrillas, que algunos caracterizan como “simbiótico-conflictivos” (Entrevista 8).

La alta probabilidad de que el ELN se haya involucrado en el negocio del narcotráfico en Norte de Santander es especialmente significativa si se tiene en cuenta que varios integrantes del Coce operan en la zona. Este detalle es importante porque, si hay un lugar donde se esperaría que lo formulado en los congresos del ELN se aplicara, es en aquellos territorios donde el Coce tiene una influencia más fuerte, y ese es el caso de este departamento. Si el ELN se ha involucrado en el narcotráfico en

Norte de Santander, como es altamente probable, ello ha ocurrido con la anuencia del Coce, lo que indicaría que la autorización para involucrarse con el narcotráfico es una orientación de carácter nacional.

La debilidad del ELN como oportunidad y como riesgo

¿Qué sugiere la debilidad relativa de un grupo armado como el ELN en términos de construcción de paz y terminación del conflicto? El relativo debilitamiento militar de la agrupación en Norte de Santander, en el sentido de que no ha podido adaptar su dispositivo militar a las nuevas exigencias de la guerra, es una ventaja comparativa para que el Estado pueda presionar una terminación del conflicto con una agenda limitada. En esta agenda limitada el actor central no sería la insurgencia sino la población civil y el Estado. Es decir, se pensaría en una especie de adaptación de la noción de Convención Nacional o de una *triangulación política*, lo que a su vez crearía la necesidad de una reformulación de la política del ELN dirigida a asegurar su supervivencia en un contexto de debilitamiento militar relativo.

Esto se puede confirmar con la tendencia actual de las organizaciones sociales del Catatumbo. Ellas están tratando de desligarse de cualquier relación con actores armados, lo que constituye una oportunidad para la terminación del conflicto, pero eso depende en gran parte de la intermediación estatal. Las recientes movilizaciones en torno a los cultivos ilícitos y las preocupaciones de los pobladores del Catatumbo frente a un nuevo boom de recursos mineros deben conducir a un tratamiento no represivo de estos conflictos sociales por parte del Estado. De otro modo, como se evidenció en este capítulo, guerrillas como el ELN aprovecharán el procedimiento gubernamental inadecuado para visibilizar su opción política por la vía de las acciones armadas, factor que incrementaría la violencia en la región.

Hasta el momento, la debilidad militar del ELN ofrece una oportunidad para la terminación del conflicto violento con esa guerrilla. ¿Cuáles son entonces las dificultades? La primera que identificó este análisis es la subordinación militar del ELN a las Farc como producto del debilitamiento militar relativo, particularmente en la zona del Catatumbo. El problema hace manifiesto el siguiente aspecto: la subordinación pone en riesgo la autonomía del ELN para adelantar diálogos con el gobierno, pues, dada la situación actual de la relación ELN-Farc, el primero necesitará del visto bueno de las segundas para cualquier acuerdo hipotético

que pretenda concertar con el gobierno. Esto podría constituirse en una dificultad para adelantar procesos de diálogo con el ELN. De la misma manera que en Arauca, las Farc desempeñarían un papel de *spoiler* en posibles diálogos y negociaciones con el ELN.

Otra dificultad potencial de la debilidad militar relativa del ELN consiste en que, dada su pérdida de control territorial y su baja capacidad operativa, esa agrupación opte por aplicar prácticas de victimización de la población civil o por el ejercicio de violencia indiscriminada. Tal circunstancia, como se observó en Arauca, trae consigo delicados efectos sobre la población civil. No obstante, hasta el momento no hay evidencia de que el ELN de Norte de Santander siga esa tendencia.

Finalmente, la actuación de los neoparamilitares puede convertirse en uno de los riesgos fundamentales para cualquier proceso de diálogo con el ELN e inclusive para la misma intermediación estatal en los conflictos sociales que hemos mencionado. Si bien la operación de estos grupos está ligada a actividades como el narcotráfico y la extorsión, ellos pueden ser aprovechados, como lo fue el paramilitarismo, para impedir que se abra un espacio de diálogo con las guerrillas.

